

**Chile: los gorilas estaban
entre nosotros**

Helios Prieto

**Chile: los gorilas estaban
entre nosotros**

**EDITORIAL
VIEJO
TOPÓ**

Primera Edición: Editorial Tiempo Contemporaneo. Bs. As. Argentina, 1973

Título: Chile: los gorilas estaban entre nosotros

Autor: Helios Prieto Campa

Maquetación y diseño de cubierta: CELP

Edición: Editorial Viejo Topo

www.viejotopo.org

ISBN: 978-956-9556-00-5

Queda hecho el depósito legal

Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-CompartirIgual-4.0-Internacional

© 1973 Ed. Tiempo Contemporáneo

© 2014 Ed. Viejo Topo

Prólogo

No se puede reeditar después de casi medio siglo a un autor tan poco conocido, sin dar una explicación. Y tratándose de un libro consagrado a la crítica de un proceso social del pasado, no se lo puede reeditar sin tratar de actualizar su contenido.

En este libro se examina muy de cerca la “vía chilena al socialismo” ensayada en 1970-73. De él se hizo sólo una edición en castellano y una en inglés en 1974, y no parece haber sido leído por mucha gente. En el Chile de esos años, cuando los militantes querían entender los sucesos importantes, leían de preferencia a autores prestigiados como dirigentes partidarios, o bien la prensa de las diversas organizaciones revolucionarias. Esos textos no eran siempre muy esclarecedores, pero expresaban –y al mismo tiempo moldeaban– el sentido común de la época. Por lo general se los leía no para descubrir perspectivas nuevas, sino para confirmar las que ya se tenían (a menudo la línea dictada por los jefes del partido). Las teorías se usaban menos para emprender nuevas exploraciones que para prevenirlas.

Las cosas han cambiado. Ahora la línea de pensamiento correcta ya no es impuesta por dirección partidaria alguna, sino por un tibio sentido común filisteo que lo invade todo. Las fuertes discrepancias teóricas y polí-

ticas de esa época hoy se expresan como diferencias de opinión, lo cual quiere decir que la conciencia social de entonces no evolucionó, sólo se atenuó. Para decirlo de otra manera: desde los días de Allende y los Cordones Industriales, la conciencia teórica sobre el capital y el trabajo, sobre las clases y la transformación social, no se ha revolucionado con la radicalidad y presteza con que la propia sociedad capitalista se revolucionó en ese lapso. El resultado es que hoy en el movimiento social siguen predominando los mismos puntos de vista –y por lo tanto las mismas opciones prácticas– que en 1970-73 se combinaron para crear un callejón sin salida histórico. Este congelamiento de la conciencia social hace que cualquier discusión sobre ese período se bloquee tarde o temprano en el mismo punto muerto en el que quedaron varados los revolucionarios de entonces. La praxis social de hoy, con todo lo que tiene de viviente y subversivo, casi no se reconoce en esa historia y busca su propia expresión teórica al margen de toda referencia a conceptos como “revolución” o “lucha de clases”. Cosa muy comprensible, ya que los únicos que siguen empleando estos conceptos no parecen tener nada que hacer con ellos excepto darles el mismo sentido que se les daba en 1973, casi como si desearan recorrer el mismo camino para llegar al mismo resultado.

En todo caso, cualquier esfuerzo por comprender la experiencia de la UP y del poder popular, se inscribe en un campo de batalla en el que todavía no hay nada

decidido. Si en torno a esa experiencia han predominado por décadas la confusión y la amnesia, se debe a que cierta dinámica social ha permanecido relativamente estable por un largo período, pero no significa que seguirá siendo así por siempre. Todas las crisis hacen emerger, junto con lo nuevo, las viejas tendencias reprimidas, lo que se ocultaba en las sombras de la historia: mañana la UP y el poder popular no van a significar lo mismo que han significado hasta hoy.

Pese a haber transcurrido casi medio siglo desde la “vía chilena al socialismo” y su fracaso catastrófico, esos acontecimientos siguen siendo en su mayor parte indescifrables para el sentido común. Lo que en realidad constituyó un dramático capítulo de la lucha social en el que cumplieron papeles bien definidos las distintas clases y fracciones de clases, el ideario socialista y revolucionario, el reformismo nacionalista y la burocracia... todo eso se nos presenta hoy como un simple choque entre el buen pueblo y la perversa oligarquía, entre estado de derecho y autoritarismo, entre democracia y dictadura. Aunque esta imagen simplista no explique nada de lo sucedido en esa época, aunque deje sin responder algunas de las interrogantes más cruciales acerca de nuestro mundo hoy —o mejor dicho, *precisamente por eso*—, esta fábula se ha impuesto exitosamente como La Historia Oficial. Una historia escrita por una clase que fue desalojada del poder sólo para que más tarde volviera a tenerlo, una historia escrita por los vencedores. Un relato que además de no

explicar nada, ha sabido resguardarse de toda crítica seria, convirtiéndose así en un relato absurdo e irreal.

En estos cuarenta años la comprensión lúcida de ese período ha chocado con un mismo obstáculo, manifestado bajo diferentes formas: primero la censura implacable ejercida por la Junta Militar; después el encuadramiento ideológico impuesto por la burguesía democrática; más tarde el sensacionalismo mediático con que los partidos de la transición banalizaron los efectos del Golpe para ocultar mejor sus causas; y por último, la frívola incompreensión inculcada, con los mismos fines, por los actuales programadores de la educación y la cultura. Estas maneras de tratar la historia de la UP no son simples “errores” de una interpretación ignorante o superficial, sino que constituyen momentos sucesivos de una misma construcción ideológica que refleja con fidelidad los intereses de las capas sociales dominantes. Por otro lado, tal visión fabulesca resulta creíble hoy por la misma razón que eran creíbles las ilusiones que condujeron al desastre en 1973. Cuando los partidos de la UP invocaban un burdo chovinismo productivista para hacer que los trabajadores afirmaran desde abajo su política de reformas, simplemente estaban diciendo lo que muchos trabajadores querían escuchar. Cuando años después esos mismos partidos canalizaron la protesta social hacia una salida democrático-burguesa, la prensa opositora y la historiografía popular-liberal no tuvieron mucha dificultad en hacer olvidar que lo sucedido en

Chile había sido un choque entre clases con intereses antagónicos, en primer lugar porque había muchísima gente que tenía ganas de olvidarlo. Más tarde, cuando esos partidos tuvieron que legitimarse como poder gobernante, emplearon todos sus recursos para movilizar la memoria social según sus propios intereses, reduciendo la historia de 1970-73 a una colección de imágenes impactantes, vacías de significado y aptas para cautivar a una masa de gente deseosa de conmoverse frente a sus televisores. En años más recientes, hecho ya el trabajo grueso de tergiversación, la gerencia progresista incluyó el período 1970-73 en el currículum escolar sólo para tener con qué enseñar una apología de la democracia, haciendo pasar tal medida como un progreso cuando sólo fue una manera pedagógicamente correcta de organizar la ignorancia de las nuevas generaciones.

El discurso de los derechos humanos, voceado obsesivamente por todos los medios durante un cuarto de siglo, vino a completar esta obra de destrucción del sentido histórico, ofreciendo un *leit motiv* piadoso capaz de movilizar la buena conciencia de cualquier cristiano sin que tuviera que ligar esos “derechos” a nada de lo que sucede en el mundo real. Esta envolvente campaña humanitaria ha logrado ocultar sistemáticamente no sólo el terrorismo cotidiano del Estado democrático, sino otra cosa igualmente grave: que el Estado ha venido empleando por décadas todos los medios a su alcance para hacer ilegible la historia de la UP y del Golpe, redu-

ciendo toda la complejidad de ese proceso a su aspecto puramente represivo. La consecuencia de esa política es que todas las enseñanzas del período 1970-73 han sido silenciadas excepto una: el terror.

Es bajo esta luz que hay que leer la vieja consigna del “nunca más”. Empuñada primero con mucha razón por los proletarios que habían conocido de cerca la represión pinochetista, al transformarse más tarde en política de Estado esta frase pasó a tener un sentido completamente diferente. Cuando los detentadores del poder movilizan la memoria social bajo sus propios términos y anuncian en sus pantallas que “nunca más” debe repetirse el pasado, eso no puede interpretarse como una advertencia hecha a los esbirros del orden capitalista, quienes de ser así ya estarían hace tiempo tras las rejas. De lo que se trata para el poder, en realidad, es de recordarle a todo el mundo que no se puede desafiar el orden de la explotación sin suscitar el terrorismo de Estado. Ese “nunca más” proferido por las agencias gubernamentales y paraestatales es menos la expresión de un anhelo cívico que una advertencia punitiva: le recuerda al público qué ilusiones debe abrazar y qué límites aceptar para no ser blanco de la represión estatal.

Frente al escepticismo que estas reflexiones puedan suscitar, diremos –parafraseando a unos compañeros– que no hay nada que podamos hacer por los ilusos y los derrotados de la historia. Si no les persuade la evidencia empírica del papel reaccionario ejercido antes y ahora

por los partidos progresistas, menos podrá persuadirlos este libro (a menos que lo lean con los ojos abiertos). En realidad, si rescatamos del olvido este escrito de Helios Prieto, es para facilitar a los lectores el acceso a una perspectiva revolucionaria que siempre estuvo ahí, pero que sólo pueden asimilar los hombres y mujeres que no se han dado por vencidos. Quienes no se conforman con ver su propio pasado como una absurda acumulación de hechos sin sentido, terminan por encontrar tarde o temprano a otros que experimentaron la misma inquietud y que supieron descubrir en esa historia una verdad que expresar. Creemos que la lectura de este libro será, al menos para quienes lean a conciencia, uno de esos encuentros decisivos.

Más arriba afirmábamos que la historia oficial se ha impuesto casi sin réplica. Hay que subrayar el “casi” en esta frase. Durante el gobierno de Salvador Allende y después del Golpe de 1973 surgieron desde la izquierda revolucionaria diversas críticas de conjunto al proyecto de la UP. Tal es el caso de los análisis formulados por Alain Labrousse¹, Ruy Mauro Marini², Gabriel Smirnow³

1 Alain Labrousse, *El experimento chileno. ¿Reforma o revolución?* Editions du Seuil, París, 1972.

2 Ruy Mauro Marini, *El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile*. Ediciones Era, México, 1976.

3 Gabriel Smirnow, *La revolución desarmada. Chile 1970-1973*. Ediciones Era, México, 1977.

y Mike Gonzalez⁴, por mencionar sólo a los menos desconocidos. Con diversos matices y énfasis, estos teóricos pusieron de relieve el contenido de clase de la “vía chilena al socialismo”, denunciando la impracticabilidad del reformismo tecnocrático propugnado por la UP, o bien insistiendo en la necesidad de armonizar los intereses de la pequeño-burguesía con los del proletariado. En el libro de Helios Prieto se encuentran varios elementos de análisis –sobre todo en lo concerniente a las medidas económicas adoptadas por la UP– que también están presentes en aquellos textos.

Lo que distingue al texto de Prieto de los demás es el modo en que emplea la crítica: no la usa para sugerir un cambio de rumbo que de cualquier forma los sectores gobernantes no podían adoptar sin traicionar sus propios intereses de clase. Tampoco quiere ofrecer un punto de vista “objetivo” elaborado al margen de las tensiones que desgarraban la convivencia entre grupos antagónicos. La cualidad que distingue a Helios Prieto de los otros comentaristas de la época, es que tanto la forma como el contenido de su texto reflejan una pasión combativa que está ausente en los análisis más bien “fríos” sobre la economía política allendista. Desde la primera a la

4 Mike Gonzalez tradujo en 1974 el presente libro de Helios Prieto, en cuya edición (*Chile: the gorillas were amongst us*, Pluto Press, UK, 1974) agregó un ensayo introductorio de gran valor analítico y documental. Existe una versión castellana de ese texto, *Chile 1972-73. Revolución y contrarrevolución*, disponible en internet.

última línea, Prieto examina el período de la UP con una ironía punzante y bien argumentada, aportando no sólo una poderosa clarificación de lo que significó dicho proceso, sino también la textura y el sabor de una experiencia crítica vivida en primera persona. No en el sentido de que relate aquí sus vivencias individuales: eso no habría sido necesario. Sabemos lo que este libro refleja porque sabemos que mientras lo escribía su autor se consagró a animar una tendencia radicalizada del movimiento obrero, formada por luchadores inconformes que intentaban constituir un polo revolucionario opuesto a la UP, desprendiéndose para ello del MIR y de otras organizaciones de izquierda. Tal actividad, llevada a cabo durante el año anterior al Golpe de 1973, puso a estos revolucionarios bajo el fuego cruzado de la represión gubernamental por un lado, y de las fuerzas de choque de la patronal por el otro. De modo que este libro, además de ser una crítica de las ilusiones reformistas de aquel tiempo, condensa la experiencia trágica de una clase obrera que, acorralada por diversas fracciones burguesas en pugna, se encontró inerme frente a un juego de fuerzas en el que durante tres años casi no pasó de ser vagón de cola de unos intereses de clase ajenos.

Pero hay también otra razón para reeditar este libro: con esta crítica Helios Prieto hizo algo más que tratar de iluminar un oscuro callejón sin salida histórico; también anticipó un tipo de contestación radical que en Latinoamérica tardaría aun varias décadas en hacerse oír,

y que hoy empiece a ser expresada por una generación de luchadores que entonces ni habían nacido.

El autor de este libro y sus amigos no figuran en ningún santoral del heroísmo revolucionario, por la sencilla razón de que nunca buscaron cosechar victorias que el proletariado no pudiera cosechar por sí mismo. En cambio, se aplicaron a la discreta tarea de salvar del desastre lo que más importaba salvar para los combates del futuro: la honestidad práctica e intelectual que hace a los hombres y mujeres capaces de emanciparse.

Los editores

Agradecemos a Mike Gonzalez por su valiosa ayuda en recuperar este fragmento de la historia. También a Graziella Baravalle, cuya confianza nos permitió saber algo más del hombre que escribió este libro.

*A mi amigo Alejandro Alarcón,
sometido a Consejo de Guerra por el
único delito de ser obrero consciente.*

Introducción

Una onda de estupor recorre la izquierda bienpensante. ¿Cómo es posible que las FFAA chilenas hayan roto “una tradición tan bonita” (para decirlo con las palabras del Ministro del Interior, general Bonilla), para consumir el golpe de estado más sangriento que se conozca en la historia de América? Formularse esta pregunta es el mejor tributo a la efectividad de la campaña desarrollada durante muchos años por la Unidad Popular y los partidos “comunistas” y socialdemócratas de todo el mundo, los que lograron echar un espeso manto de olvido sobre la historia represora de las FFAA chilenas para mejor cortejarlas.

En la conciencia del pueblo chileno se produjo una profunda fractura en relación al papel que jugaban los aparatos represores del Estado: por una parte recordaba las masacres que arrancando de Santa María de Iquique en 1907 (3.000 obreros fusilados), pasaban por docenas de muertos en Valparaíso y Santiago en 1957, para terminar en las masacres mineras del gobierno de Frei; por otra parte, desde todos los medios de comunicación y en todos los discursos oficiales se machacó sobre el carácter constitucionalista (por supuesto, sin señalar

el carácter burgués de la Constitución chilena) de las FFAA. Allende llegó a decir, a mediados de 1971, en un discurso que pronunció en la Universidad de Concepción, rodeado por sus edecanes militares y polemizando con el MIR, que él era presidente de la república “gracias a las FFAA de Chile”.

Parecía que Chile había tenido dos ejércitos: uno hasta 1970 y otro de allí en adelante. Sin embargo el gobierno de Allende, cumpliendo escrupulosamente con el Estatuto de Garantías Constitucionales que suscribió con sus aliados demócratacristianos en el Congreso Nacional en octubre de 1970, no efectuó ningún movimiento importante de jefes ni en las FFAA ni en Carabineros y pese a que proclamó la disolución del odiado “Grupo Móvil” (cuerpo especializado en la represión callejera) se limitó a cambiarle el nombre, llamándole de allí en adelante “Grupo Especial”. El aparato de represión siguió intacto y son los generales “allendistas” los que hoy masacran al pueblo chileno.

Este trabajo no es una historia de los tres años de gobierno de la UP. Nuestro propósito es escribirla a medida que vamos rehaciendo nuestro archivo, que se consumió en el fuego purificador de la Junta Militar en los días posteriores al golpe de estado. Esta es una crónica de los hechos más importantes de la lucha de clases en los meses anteriores al derrocamiento de Allende que trata de explicar las causas directas de esa caída y el salvajismo de la Junta Militar. Las causas de fondo se

encuentran en el “modelo de transición al socialismo” que eligieron los reformistas chilenos y en la política económica que aplicaron en los dos primeros años de gobierno. Esta política económica que analizaremos en un trabajo más extenso, provocó una grave crisis y modificaciones importantes en las relaciones entre las clases, contribuyendo al aislamiento del proletariado y al fortalecimiento de la burguesía industrial y comercial. Quedamos pues en deuda con el lector.

Quisimos adelantarnos publicando este trabajo para participar en el debate que ya ha comenzado en todo el movimiento revolucionario, sobre el fracaso de la Unidad Popular chilena. Chile ha sido otro modelo clásico de lo que le sucede al proletariado cuando es dirigido por los reformistas. Sin embargo no nos hacemos demasiadas ilusiones sobre la efectividad de este análisis. Las fuerzas que trabajan para el capitalismo en el seno de la clase obrera cobijadas bajo la bandera del “comunismo” son muy poderosas: hoy los partidos comunistas reformistas tratan de convencer en la mayor parte del mundo a las masas para que repitan todos los errores que se cometieron en Chile. Esperamos vivir unos pocos años más para ver otra vez a los parlamentarios “comunistas” y “socialistas” hablando en Chile de la vía pacífica al socialismo y del carácter constitucionalista de las FFAA, las que una vez se desviaron de su límpida trayectoria por la conjura de una pérfida camarilla de generales. Quizás el empeño de los reformistas fracase. Rosa Luxemburgo decía que

hay un solo remedio para las ilusiones reformistas del proletariado, pero que, desgraciadamente, ese remedio va acompañado de mucha sangre. Como se sabe, los militares chilenos no han escatimado esa medicina. Miles de discursos y panfletos de los reformistas de todo el mundo no bastarán para olvidar la sangre y el sufrimiento que le costó al proletariado chileno el intento de “construir el socialismo sin costo social”.

1972: La lucha se agudiza

En el segundo semestre de 1972, la lucha de clases comenzó a agudizarse en las grandes ciudades. La burguesía había permitido que 1971 fuera un año de relativa estabilidad para el gobierno, en parte porque tuvo que rehacer sus fuerzas después de la derrota política que sufrió en las elecciones de 1970, pero, fundamentalmente, porque el partido de la burguesía industrial y comercial –la Democracia Cristiana– apoyaba los objetivos nacionalistas y agrarios del programa de la UP: reforma agraria de acuerdo a la ley de la misma Democracia Cristiana, nacionalización de las riquezas básicas –especialmente el cobre– y desarrollo del capitalismo de estado, tendencia que ya había comenzado a manifestarse en los gobiernos burgueses de la década del treinta. En 1971 el gobierno se dio a una política de reactivación económica consistente

en alzas masivas de salarios para aumentar la demanda y “forzar a los burgueses a ocupar la capacidad industrial ociosa”. Esta política tuvo éxito por unos meses pero generó una gran demanda de importación de bienes de capital y consumo, y aumentó el circulante creando graves presiones inflacionarias. A fines de año la situación económica se tornaba grave y, además, la UP podía avanzar ya muy poco si no atacaba a la burguesía industrial, base de sustentación de su aliado fundamental, la Democracia Cristiana. En diciembre de ese año se desata la contraofensiva burguesa –en la célebre “marcha de las cacerolas”– que continuaría, con altos y bajos, hasta la caída de Allende. En el primer semestre de 1972 la UP pierde votación en las elecciones complementarias, sus “aliados” vuelven al redil democristiano, y el cumplimiento de su programa empieza a detenerse, desde entonces las fábricas que pasan al área estatal serán sólo las que el proletariado tome por propia iniciativa y en abierta rebeldía a sus direcciones. En julio de ese año es removido Pedro Vuscovic del Ministerio de Economía y reemplazado por Orlando Millas del PC, el que propone “congelar el proceso”. Desde hacía un año, como consecuencia del crecimiento descontrolado de circulante, de la política económica general de la UP –que por razones de espacio es imposible analizar aquí– y del sabotaje consciente de la burguesía, comienzan a canalizarse hacia el mercado negro los productos esenciales y a crecer el desabastecimiento de los mismos. En el primer año de

gobierno la burguesía había respetado relativamente los precios oficiales, pero en el primer semestre de 1972 éstos escapan al control del estado que sólo disponía de 500 inspectores para controlar el comercio de todo el país (125.000 empresas). El gobierno crea entonces las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que a fines de 1971 sumaban en todo el país 880 y a fines de 1972 eran 2.080, pero que no tenían poder alguno para fiscalizar los precios. En el primer semestre de 1972 los alimentos suben el 37,4 % (casi el doble de todo el año anterior). La primera medida de Orlando Millas es adoptar una política “realista” de precios y en los meses de agosto y setiembre autoriza un alza de precios en los alimentos del 38,1% y el 30,4% respectivamente.

La UP había sostenido con orgullo, hasta ese momento, haber logrado una considerable redistribución del ingreso nacional a favor de los trabajadores. A partir de agosto toda reivindicación salarial fue atacada como “economismo” e imputada a la “falta de conciencia de clase”. Por efectos del mercado negro y de la inflación, los obreros retornaban paulatinamente al nivel de vida que tenían en 1970. Inevitablemente se produjo la primera reacción autónoma del proletariado. Con la oposición del PC los obreros de Cerrillos, una de las barriadas industriales más grandes de Santiago, fundan el primer “cordón”, toman las fábricas y cierran los caminos, exigiendo que las industrias sean estatizadas. Esta consigna obedecía al alto grado de conciencia anticapitalista de la clase obrera

chilena pero tenía, además, un fundamento económico: los obreros de las industrias estatizadas tenían un nivel más alto de salarios. Desde el principio los “cordones industriales” integrados por obreros de la UP se mueven con gran autonomía frente a sus direcciones políticas. En octubre la burguesía lanza su primera ofensiva de masas de carácter global. Ataca en el punto en el que se sabe más fuerte: el aparato de distribución, ya que allí la clase obrera tiene poco peso numérico y organización. Logra paralizar todo el transporte y el comercio. Uno de los mitos de la UP ha sido y es que en octubre la clase obrera obtuvo un triunfo sobre la burguesía. Para alimentar este mito recurrió al fácil expediente de adjudicarle a la burguesía objetivos que no persiguió, para concluir después con que fue derrotada. Según la UP la movilización de octubre perseguía el derrocamiento de Allende. Evidentemente los mariscales de la UP no supieron olfatear el golpe de estado ni en octubre de 1972 ni en setiembre de 1973 y terminaron como el pastor de la fábula, de tanto anunciar golpes de estado nadie les creyó cuando la cosa fue en serio. Exceptuando el grupo delirante “Patria y Libertad” –una secta fascista sin importancia social ni política– en octubre de 1972 ningún partido de la burguesía buscó el golpe de estado. Por más que se rastreen las declaraciones del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana es imposible encontrar llamamientos al derrocamiento de Allende (a diferencia de los días previos al golpe de setiembre de

1973, en los que hasta el Congreso Nacional proclamó que el gobierno estaba apartándose de la Constitución y la ley). En ese mes dramático la burguesía resucitó a González Videla, el más anticomunista de todos los políticos burgueses, quien apareció ante las cámaras de TV después de 20 años de ausencia de la vida pública para hacerle un llamado a Allende para que hiciera lo mismo que había hecho él durante su presidencia, proscribir al PC y mandar a sus militantes a campos de concentración. Para sorpresa de quienes creían que la burguesía quería el derrocamiento inmediato de Allende, González Videla finalizó su intervención con una enérgica declaración anti-golpista.

En realidad los partidos burgueses se propusieron exactamente lo que consiguieron, llevar a los militares al gabinete y de esta forma cercar y controlar totalmente al gobierno. Este hizo todo lo necesario para que el objetivo de la burguesía se llevara a cabo. A los pocos días de iniciada la huelga de los camioneros, decretó zona de emergencia en las 13 provincias más importantes y las colocó bajo el mando de los mismos generales que hoy masacran a la clase obrera. Simultáneamente impidió que los obreros intervinieran en la lucha política convenciéndolos de que su deber era la “batalla de la producción” para romper el paro, y desautorizando o reprimiendo a los pocos sectores que escapando a su control formaban piquetes para abrir los comercios o requisar los camiones. La clase obrera fue confinada a

las fábricas en una actitud combativa pero fatalmente defensiva, las calles quedaron hasta el 11 de setiembre en manos de la burguesía y la solución del conflicto fue entregada al ejército, el que pasó a ocupar, montado en la UP, un lugar en el gobierno después de haber permanecido años fuera de él. El resultado final fue el gabinete UP-Generales, gran triunfo de la burguesía que fue presentado ante las masas como la conquista del ejército para el “programa de la UP”. El único saldo positivo de las luchas de octubre, fue que se desarrollaron los comandos comunales y cordones industriales que habían surgido unos meses antes. Estos vinieron a llenar un vacío de organización muy grande dejado por el carácter burocrático de la CUT que sólo agrupaba aproximadamente el 30% de los trabajadores y que no tenía ningún tipo de organización regional en las grandes barriadas obreras. Pero este avance organizativo –exagerado por la izquierda socialista y el MIR que trataron de presentarlo como el surgimiento de soviets– no resultaba gran cosa ante la derrota política que significaba la participación de las FFAA en el gobierno, e iba a desaparecer meses más tarde bajo la brutalidad de la bota militar al no estar sustentado por un avance de la conciencia de clase que permitiera a los obreros comprender el verdadero carácter de las FFAA del régimen.

La lucha electoral de marzo de 1973

El nuevo gabinete fue un acuerdo transitorio, una concesión que la UP se vio forzada a hacerle a la oposición, de espaldas a las masas, pero con la esperanza de recuperar terreno en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Por su parte la oposición esperaba obtener en esa elección los dos tercios necesarios para colocar a Allende en la situación de sirviente incondicional de un Congreso con mayoría opositora o, simplemente, desembarazarse de él mediante una acusación constitucional. La táctica de la DC era la primera: su sueño era conseguir que Allende se convirtiera hasta 1976 en un dócil títere de su política para hacerlo llegar a las elecciones presidenciales totalmente desprestigiado y recuperar el gobierno. El Partido Nacional buscaba en cambio crear las condiciones para sacarlo legalmente del gobierno o para un futuro golpe de estado. Las expectativas de la oposición, que después se mostraron desmesuradas, tenían en esos meses cierto asidero. La crisis económica era grave, el desabastecimiento comenzaba a ser desesperante y en octubre las masas pequeñoburguesas habían actuado a la ofensiva, mientras que el proletariado había estado constreñido a la posición defensiva en que lo había colocado la UP.

Durante cuatro meses y medio la lucha electoral absorbió las energías del proletariado; los cordones industriales que habían surgido como órganos de la lucha de clases

directa se incorporaron a la campaña electoral. El Partido Socialista mostró una vez más su tradicional capacidad para canalizar las aspiraciones revolucionarias de las masas por un cauce socialdemócrata. La candidatura de Altamirano se presentó como una alternativa “izquierdista” que hizo que el MIR retrocediera en su propósito de presentar candidatos propios y –por temor a un fracaso electoral– se limitara a apoyarla. Los combates de agosto a octubre encontraron eco en los discursos petardistas sin contenido del candidato socialista. “Avanzar sin transar”, “A darles con todo”, “Aplastar la sedición”, “Crear, crear Poder popular”, “Ahora es el momento, con todo y adelante”, eran las consignas del día, vacías pero seductoras.

Por su parte el PC desarrolló una inteligente campaña contra el mercado negro y la especulación, logrando convencer a sectores de la población de que el desabastecimiento se debía, exclusivamente, al sabotaje y acaparamiento de la oposición. Una burla a las masas por dos motivos: el primero, porque era la política económica de la UP –consustancial a su “modelo de tránsito pacífico al socialismo”– la principal causa del desastre económico; el segundo, porque al día siguiente de las elecciones el PC se olvidó de la lucha contra el mercado negro pasando, alegremente, a ocuparse de otros temas. Lo cierto es que el proletariado chileno dio una prueba más de su paciencia y abnegación, votando por los candidatos de la UP pese a que ésta lo estaba llevan-

do al desastre paso a paso; la UP obtuvo el 43 % de los votos y se cerró la salida constitucional a la crisis. En un reciente reportaje publicado en Chile, el general Gustavo Leigh, integrante de la Junta, declaró que fue en el mes de marzo cuando el alto mando de las FFAA comenzó a preparar el golpe de estado. Esto podía ignorarlo sólo quien quisiera ser ciego y sordo a la realidad para seguir disfrutando la molición de la “vía chilena”. Pese a todo, con un frenesí suicida, la UP siguió alimentando, más que nunca, el mito del carácter profesional, democrático y constitucionalista de las FFAA.

De marzo a junio la U.P. pierde base social

La contienda electoral había desviado a la clase obrera de la lucha de clases. Una vez finalizada, los problemas de las masas se plantearon con crudeza creciente. En los meses de campaña los conflictos sindicales casi desaparecieron, quince días después volvieron a comenzar las huelgas y ocupaciones y se desarrollaron a un ritmo vertiginoso hasta fines de abril, cuando el Congreso despachó la ley de reajustes y hubo otra notoria caída de los conflictos. Ante la ola de huelgas del mes de abril la UP adoptó una política represiva y hostil. La campaña contra el “economismo” se redobló en todos los órganos de prensa

y, en algunos casos, se combinó con la represión directa. Para responder a las exigencias crecientes de las masas el Poder Ejecutivo envió al Congreso –dominado por mayoría opositora– un proyecto de ley de reajustes. Era una maniobra politiquera que buscaba transferirle a los diputados de la burguesía la responsabilidad de responder a las demandas de las masas. El pretexto formal era que el proyecto contenía reformas tributarias para que los aumentos fueran financiados con nuevos impuestos a la burguesía. Por supuesto que el proyecto fue aprobado, meses más tarde, sin esas fuentes de financiamiento.

Respaldado en las elecciones el reformismo se preparaba para gobernar hasta 1976 reprimiendo la izquierda. Comenzó organizando un golpe de estado en el MAPU, uno de los partidos de la UP, en el que el ala izquierda, que tenía algunas posiciones cercanas al MIR había ganado el último Congreso. Matones armados por el PC ocuparon los locales partidarios y la imprenta, expulsaron a los dirigentes legítimos e impusieron como dirección a la derecha minoritaria. Este golpe era un tanteo inicial para desatar una ofensiva similar contra la izquierda socialista, pero la reacción de la base obrera del MAPU que apoyó masivamente a la dirección de izquierda, dejando a los golpistas en minoría, pospuso la ofensiva contra la izquierda socialista. Esta no llegó a consumarse nunca porque la reanudación de la lucha de clases despertó al reformismo de su sueño electoral y lo obligó a unir fuerzas para enfrentar –a su modo– la

nueva ofensiva burguesa, y para ahogar los intentos de autonomía de la clase obrera.

La dirección socialista-comunista de la CUT, que había sido incapaz en dos años y medio de gobierno de sindicalizar a los trabajadores y de crear organismos regionales de coordinación sindical, se lanzó sobre los cordones industriales, creación de los sectores más avanzados de la clase obrera, con la pretensión de controlarlos para impedir que estorbaran los planes económicos del reformismo, principalmente su política salarial y sus propósitos de limitar la extensión del área estatal de la economía para llegar a un acuerdo estable con la Democracia Cristiana. Esta política contra el proletariado se desarrolló por tres andariveles. Donde pudo hacerlo, el gabinete UP-Generales devolvió las empresas que los obreros se habían tomado en la crisis de octubre (las trece industrias electrónicas de Arica por ejemplo) para restarle poder a los cordones y ofrecerle garantías a la burguesía. Se desató a la vez una campaña contra el “paralelismo sindical” exigiendo a las direcciones autónomas que se subordinaran a la dirección de la CUT. Esta dirección, por último, comenzó a organizar cordones industriales donde no existían todavía, siguiendo procedimientos antidemocráticos, designando los dirigentes desde arriba y con muy poca participación de las masas, en la perspectiva de preparar un “Congreso de los Cordones” en el que tendría –gracias a estos procedimientos

burocráticos— mayoría para imponer su política. Esta guerra de desgaste contra los sectores más avanzados de la clase obrera fue la fase inicial de una ofensiva que culminaron, a sangre y fuego, los militares. El MIR participó inicialmente en la formación de los cordones industriales y comandos comunales, pero no entendió su naturaleza y las funciones que espontáneamente les asignaba la clase obrera: para ésta eran organismos proletarios en los que se nucleaba para crear sindicatos clasistas, defender sus reivindicaciones inmediatas y enfrentar a la burocracia estatal y sindical. La dirección del MIR, en cambio quería que en Chile se repitieran las condiciones de la Rusia del 17, entonces pretendió que los cordones jugaran el papel de los soviets. Esto condujo a que sectores conscientes del proletariado se apartaran de ellos cuando empezaron a tratar los problemas de abastecimiento y distribución de alimentos y más tarde, cuando se desató la ofensiva burocrática, el MIR no supo cómo responder y terminó adhiriendo a la campaña contra el “paralelismo sindical”. Su representante ante una mesa redonda organizada por la revista socialista-mirista “Chile Hoy”, señaló que los cordones “incurrían en paralelismo sindical” sorprendiendo al coordinador de la mesa que llegó a preguntarle cómo era posible que el MIR tuviera una posición más hostil hacia los cordones que los socialistas. La explicación subsiguiente fue de antología: si los cordones hubieran agrupado todos los sectores populares (soviets), no

hubieran caído en el paralelismo; como no lo hacían, caían en él. El conflicto que jugó un papel central en este período fue la huelga de los mineros de El Teniente. El proletariado del cobre había sido en Chile la indiscutible vanguardia del movimiento obrero hasta 1970. Se trata del sector del proletariado más altamente concentrado y sometido –junto a los mineros del carbón– a las peores condiciones de vida y de trabajo. Aislados en campamentos insalubres, en medio del desierto, bajo la explotación directa de las compañías imperialistas, los obreros del cobre tenían en su haber el más alto porcentaje de huelgas en todo el país, y habían sufrido las peores masacres durante la administración de Frei. En septiembre de 1970 fue en los enclaves cupríferos donde Allende sacó el más alto porcentaje de votos de todo el país, porcentaje que osciló en las tres concentraciones más grandes (El Teniente es una de ellas) entre el 60 y el 80 % (mientras en el resto del país promedió menos del 33%). Es cierto que los obreros del cobre tenían salarios más altos que el promedio nacional, pero no se debía a la “generosidad” de las compañías norteamericanas. Simplemente ocurría que en quince o veinte años de trabajo brutal, los obreros del cobre desgastaban totalmente su fuerza de trabajo, siendo el sector obrero que tenía el promedio de vida más bajo; en la gran minería del cobre hay, además, un promedio de 300 accidentes de trabajo mortales por año.

Una dirección que quisiera realmente arrancar a los

capitalistas parte de la plusvalía y redistribuir el ingreso nacional favoreciendo a la clase obrera con mayores salarios, propósito que decía perseguir la UP con su proyecto de ley de reajustes enviado al congreso justamente en la época en que comenzó la huelga de El Teniente, no tenía otro modo de movilizar la clase obrera de todo el país que apoyar las demandas del sector tradicionalmente más combativo, para luego extenderlas al resto del movimiento obrero. La UP hizo exactamente lo contrario. La huelga se inició contando con el apoyo de la totalidad de los obreros de “El Teniente”, socialistas y comunistas incluidos, pero a los cinco días de iniciada, las direcciones de esos partidos conminaron a sus afiliados para que volvieran al trabajo, cosa que hicieron en los lugares en que los sindicatos estaban controlados por socialistas y comunistas. De inmediato la UP desató una odiosa campaña tendiente a separar a los obreros del cobre del resto de su clase tildándolos de “aristocracia obrera” (cada uno de esos “aristócratas” tiene una expectativa de vida de 40 o 50 años). Se alimentaron las más bajas pasiones de los obreros apelando a los más sumergidos, como por ejemplo, los obreros del carbón que ganan salarios de dos o tres mil escudos mensuales, para que denunciaran a sus hermanos del cobre como privilegiados. Se ocultó ante los ojos del país y el mundo el carácter proletario del conflicto, llamando a los huelguistas “empleados” y negando que fueran obreros. Una sucia utilización de una ley democratacristiana, que le había otorgado el

nombre formal de empleados, entre otros, a los torneros, electricistas, fresadores, ajustadores, operadores de palas mecánicas y choferes, oficios que dado el alto grado de especialización de la gran minería del cobre, abarcan casi la mitad de los obreros.

Ni siquiera el legislador demócratacristiano habría imaginado que su ley sería tan útil para dividir a los obreros. El principal dirigente del conflicto, Guillermo Medina, que había sido un año antes el jefe de la campaña electoral del candidato socialista, fue desde allí en adelante, para toda la prensa UP, el “nazi Medina”. La misma prensa publicó declaraciones de su hijo, militante de la juventud comunista, renegando de su padre.

Sin embargo, el heroico proletariado minero no cedió. A los *treinta días de huelga* una vez que se hizo evidente que el gobierno UP cuidaba escrupulosamente sus intereses, la burguesía comenzó a hacer una utilización demagógica del conflicto. La confederación “Triunfo Campesino” controlada por la democracia cristiana, apoyó públicamente a los huelguistas y tras ella se incorporaron los gremios burgueses y los estudiantes opositores. La UP había arrojado lo mejor de su base social en brazos de sus enemigos. La dirección sindical de Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo, llamó en ese momento a una elección para decidir si marchaba o no a la huelga en apoyo a los mineros de El Teniente. La posición de la UP, de no adherir a la huelga, ganó por menos de 100 votos sobre un total de 5.000 votantes;

con desparpajo, el burócrata comunista de la CUT, Luis Figueroa, presentó esta división de la clase obrera de Chuquicamata por la mitad, como un gran triunfo del proletariado contra el nazismo. Cuando en junio, los obreros de El Teniente marcharon sobre Santiago a exigir una entrevista con Allende, el grupo móvil de carabineros, que la UP decía haber disuelto en 1970, los esperó sobre un puente y los reprimió violentamente. En Rancagua, la ciudad más cercana a la mina, también los carabineros, obedeciendo órdenes del gobierno, disolvieron a los manifestantes con todos sus elementos disuasivos, incluyendo tanquetas. Protegiendo a los crumiros⁵ socialistas y comunistas de los piquetes de huelga, los carabineros asesinaron a un huelguista.

En este clima de profunda división de la clase obrera, se produjo el intento golpista del Blindado 2 del 29 de junio.

Del intento de Souper al golpe del 11 de setiembre

El 29 de junio los militantes de la UP despertaron sorprendidos por el fuego de artillería contra La Moneda. Veinte veces el Gobierno había anunciado el golpe de estado; esta vez no había preparado ninguna movilización

⁵ Crumiro: sinónimo de esquirolo, rompehuelgas.

ni había alertado a la población. Sin embargo el intento del coronel Souper, había sido precedido por uno de esos procesos tan propios de la “vía chilena”. Souper era uno de los pocos militares con mando de tropa que estaban conspirando con la secta “Patria y Libertad”, actividad que fue mal vista por el alto mando que quería preservar la unidad de las FFAA para asestar su propio golpe. El día 21 se le notificó, que en conocimiento de sus actividades conspirativas, el alto mando había resuelto destituirlo como jefe de su unidad, lo que se haría en ceremonia, con banda y formación, el día 29 a las 11 de la mañana. Ese día, a las 9, cuando Allende aún no había llegado a La Moneda, Souper la sitió con 4 tanques y soldados. El alto mando reprimió en pocas horas el intento. El coronel golpista no había intentado seriamente tomarse el poder, pero había creado un típico hecho de “propaganda armada”; su acción actuó como catalizador y desencadenó un abierto proceso de deliberación dentro de las FFAA que ayudó a los propósitos golpistas del alto mando y colocó a la UP en una situación de mayor dependencia política respecto de la DC.

El grueso de la oficialidad y suboficialidad de las FFAA, profundamente anticomunista, estrechamente vinculada con el ejército norteamericano y mucho menos formada políticamente que los altos oficiales, venía tolerando con impaciencia la hábil política del alto mando, consistente en apoyar a Allende para cercarlo y someterlo y era partidaria, desde mucho tiempo antes, de una

salida golpista. Las FFAA eran una caldera a punto de explotar contenida por el estado mayor. Hoy, nadie que haya sido testigo de las brutalidades cometidas por el grueso de los oficiales y suboficiales después del 11 de setiembre puede dudar de cuál era el estado de ánimo de esa gente antes de esa fecha. Pero toda la izquierda chilena, incluido el MIR, prefirió cerrar los ojos ante esta realidad y engañarse trasladando al interior de las FFAA, un esquema de “lucha de clases” que sólo era una ilusión.

La UP había intentado cortejar a las FFAA con una política económica que era el reverso de la aplicada con el proletariado. Nunca los militares chilenos gozaron de tantas prebendas como en los tres años de gobierno de Allende y justamente cuando los mineros de El Teniente eran reprimidos a sangre y fuego, el P.E. envió al Congreso con carácter de urgencia un proyecto para otorgarles fabulosos aumentos de sueldo a los militares (cuya magnitud fue ocultada como secreto de estado). Con esta ingenua política se creía poder ganarlos y se esperaba (luego veremos que se esperó hasta último momento) una reacción antigolpista de los suboficiales y soldados. Pero la realidad era la inversa a lo soñado por la UP y la salida extemporánea de Souper desencadenó un movimiento de base de la oficialidad y suboficialidad que en todos los cuarteles empezó a exigir al alto mando una definición rápida.

Por otra parte, el día 29 quedó en claro la absoluta

indefensión de la UP ante un pronunciamiento militar. A las 9 hrs., cuando fue notificado en su residencia de Tomás Moro que los tanques rodeaban La Moneda, Allende llamó a la clase obrera a movilizarse al centro de la ciudad para reprimir el intento. Quince minutos más tarde, luego de haber conferenciado con los comandantes en jefe, dio marcha atrás en la directiva y llamó a los obreros a ocupar las fábricas y a esperar las órdenes de la CUT, y a “confiar en los soldados de la patria”. El desarme del Blindado 2 quedó a cargo de la comandancia del ejército y las masas recién entraron en escena a la noche en una concentración ante La Moneda, donde fueron forzadas por Allende a vivir a los verdaderos golpistas: los comandantes de la Marina y la FACH. Esa misma noche, el MIR, por un error de cálculo político, también manifestó su debilidad. Al término del acto de masas frente a La Moneda, un camión con parlantes se instaló frente a la Biblioteca Nacional, ubicada a unas cinco cuadras de distancia, llamando a “todo el pueblo de la provincia de Santiago a concentrarse para escuchar la palabra del Secretario general del MIR, Miguel Enriquez”. Unos doscientos jóvenes, en formación militar, con cascos y largos garrotes, se ubicaron frente a la escalinata y cinco minutos más tarde llegó a un ómnibus del que descendieron cuatro carabineros armados con fusiles provocando una desbandada general. Así, por obra de cuatro carabineros, el jefe de la más temida formación paramilitar de la izquierda no pudo hacer oír su voz en

tan histórica noche.

A partir del día 29, la dirección de la UP comprendió que su única posibilidad de estabilidad residía en un acuerdo con la DC. Pero los reformistas tienen un siglo de experiencia en negociaciones y saben que para sentarse a una mesa de acuerdos es necesario conquistar primero una posición de fuerza. Los primeros quince días de julio fueron de una euforia indescriptible. La UP quería vencer a las masas de la fidelidad de las FFAA y de que se había “aplastado el golpe”. La revista mirista “Punto Final” dedicó su ejemplar del día 30 (que fue requisado por el ejército), a la consigna “Ahora dictadura popular de la UP y las FFAA”; en un suplemento especial se explicaba que para terminar con los intentos golpistas debía instaurarse una “dictadura popular” del ejército y la UP y disolverse el Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría de la República; como vemos, una posición aún más derechista que la del PC. En todas las fábricas estatizadas los interventores suspendieron la producción y los obreros comenzaron a fabricar armamento para “asestar el golpe definitivo a los momios”. Los mariscales de la insurrección UP hacían fabricar sables (!), miguelitos, explosivos caseros, linchacos y granadas a los obreros. Esta línea delirante fue impulsada por la UP en su conjunto, incluido el PC: la finalidad que se perseguía era asustar a la DC y obligarla a llegar a un acuerdo. El resultado que se obtuvo fue galvanizar a las FFAA y determinarlas a planificar una verdadera operación de exterminio. Los

obreros democristianos informaban a sus direcciones o directamente a los militares, de los preparativos que se llevaban adelante en las fábricas, y el ejército centralizaba esa información llegando a la conclusión de que debía actuar con rapidez y suma violencia para evitar que el proletariado se armara.

El MIR y la izquierda del PS llegaron a creer que el reformismo estaba dispuesto a desatar la guerra civil para hacer la revolución socialista. En esos círculos se sostenía que el PC estaba “entre la espada y la pared” y que para no sucumbir desataría la insurrección. Se fantaseaba con paralelos históricos recordando al PC vietnamita de los años 30, sin reparar en las diferencias que separaban a Chile de Vietnam, al año 30 del 73, y a Ho Chi Min de Lucho Corvalán. Arrastrado por ese clima, Miguel Enríquez pronunció a mediados de julio, un discurso delirante en el Caupolicán, en el que sostuvo que la clase obrera chilena nunca había estado tan cerca de la toma del poder y que bastaba con dar un pequeño empujón a los reformistas para que la insurrección proletaria se consumara. En realidad ocurría exactamente lo contrario: conducida por la política irresponsable, aventurera a veces, entreguista otras, del centrismo reformista, la clase obrera marchaba, ineluctablemente, a su derrota. Los reformistas nunca han hecho revoluciones.

Es necesario recalcar que el salvajismo de la represión golpista guarda relación directa con el irresponsable aventurerismo de la UP. Los reformistas chilenos tropezaron con

un obstáculo insalvable para llevar adelante su proyecto: Chile es un país atrasado, con graves contradicciones y una gran pobreza. Los gobiernos reformistas o socialdemócratas (el chileno lo fue en todo sentido) necesitan de un proceso de desarrollo económico y riqueza para conservar su estabilidad. Esto ha sido hartamente demostrado por la experiencia del reformismo europeo. Como en Chile no se dan esas condiciones y la UP estaba presionada por los cubanos que la apoyaban (pero le exigían una política militarista de recambio “por si fracasaba la vía chilena”) fue incapaz de darse una política reformista coherente y coqueteó permanentemente con las tendencias militaristas. Allende no quería renegar de su pasado de jefe de la OLAS, ni romper con los revolucionarios—después de todo una de sus misiones era impedir que estos actuaran en forma independiente— entonces se veía obligado a hacerles concesiones para poder mantener su apoyo. En marzo de 1972 pidió o aceptó la llegada de una gran cantidad de armamento que fue detectado por el servicio de inteligencia militar (armamento que en lugar de ser distribuido al proletariado fue encontrado el 11 de setiembre en los sótanos de La Moneda y Tomás Moro) y que arribó a Pudahuel en un avión de la Cubana de Aviación. Periódicamente algunos miembros del GAP (su guardia defensiva) caían presos en acciones expropiatorias o vinculadas con grupos militaristas; en su residencia del Cañaveral efectuaba prácticas de tiro con los miembros del GAP que eran fotografiadas por

agentes del servicio de inteligencia militar infiltrados en sus círculos más allegados. Mientras toda su política era reformista y no se preparaba a la clase obrera para enfrentarse con las FFAA el alto mando iba registrando estas extrañas actividades del presidente y llegando a la conclusión (los militares no hacen análisis muy sutiles) de que estaba ante un enemigo peligroso al que había que aplastar sin piedad. A esta altura la UP había logrado crear la impresión de que estaba armando al proletariado y preparándose para un enfrentamiento decisivo, sin haber hecho nada serio en este sentido. Entonces el cardenal Silva Henríquez (el mismo que hoy sale de garante del humanitarismo de la Junta Militar) hizo un llamado al diálogo para evitar la guerra civil. El Partido Comunista venía —desde varios meses atrás— desarrollando una intensa campaña de propaganda contra “la guerra civil”, con el fin de presionar a la Democracia Cristiana para un entendimiento y de convencer a las masas de la necesidad de ese acuerdo. En realidad nunca existió el menor peligro de guerra civil ya que para que eso ocurra, como todo el mundo sabe, son necesarios dos ejércitos. En Chile eso podía suceder solamente de una de dos maneras: una división en las FFAA, cosa que era imposible como lo demostraron los hechos posteriormente, división, por otra parte que ningún partido de izquierda trataba de provocar; o el armamento del proletariado, condición que sólo podría darse a partir de un cambio cualitativo en la política reformista de la UP. El llamado del cardenal

le vino muy bien al PC y a Allende para dar un brusco viraje. Este último, en un discurso pronunciado el 25 de julio ante un plenario de delegados de la CUT (Allende siempre eligió escenarios obreros para hacer sus anuncios más antiobreros) anunció la apertura del diálogo con “el partido democrático mayoritario de Chile” (según Allende la Democracia Cristiana) para evitar la “guerra civil”. Cuarenta y cinco días antes del golpe Allende consideraba que los principales problemas del país eran las demandas salariales excesivas de los obreros, su “economicismo”, y el “paralelismo sindical” de los cordones industriales. Pronunció un severo sermón contra la clase obrera y aclaró tajantemente: “ESTE PAIS VIVE UN PROCESO CAPITALISTA”; anunció una severa política salarial advirtiendo que en el año próximo los reajustes de sueldos podrían ser inferiores al alza del costo de la vida, aclaró que las FFAA seguirían aplicando estrictamente la ley de control de armas y sugirió, en medio de una ovación de sus anfitriones “comunistas” que el MIR podría estar actuando en complicidad con la CIA. Como vemos, una excelente política para preparar al proletariado para los enfrentamientos que se avecinaban.

La primera fase de preparación del golpe

Durante todo el mes de agosto, mientras Allende y Aylwin (el presidente del PDC) dialogaban, sembrando la confusión en la clase obrera que luego de dos semanas de “preparativos insurreccionales” veía nuevamente a su dirección sentada a la mesa de las negociaciones con la DC; las FFAA, amparándose en la ley de control de armas, realizaron expediciones punitivas contra fundos y fábricas. La primera se llevó a cabo en Lanera Austral de Punta Arenas, allí golpearon a todos los obreros, robaron sus efectos personales, mataron a uno e hirieron a otro de un bayonetazo y destrozaron las máquinas buscando armas sin resultado. La UP no condenó el operativo. Las FFAA –a la par de intimidar a los obreros– medían la magnitud del “armamento popular” y la firmeza política del gobierno. Las únicas voces de protesta fueron las del MIR y la del diputado socialista Mario Palestro. El día 8 de agosto el general “allendista” Carlos Prats, presentó una querrela del ejército contra ambos en los tribunales de justicia. El 7 de agosto la Marina detuvo a un grupo de marineros y suboficiales atribuyéndoles un fantasioso plan subversivo. En realidad era un pequeño grupo de simpatizantes de la UP que, creyendo en la propaganda del allendismo, habían efectuado algunas reuniones para concertar alguna acción contra los des-

embozados preparativos golpistas de la oficialidad. Los detenidos fueron sometidos a torturas y flagelaciones. Cuando éstas fueron denunciadas por sus familiares y abogados Allende reaccionó defendiendo a la Marina. “Las acciones o declaraciones –dijo refiriéndose a las denuncias de torturas– que contribuyen a dificultar un proceso crítico como el que vive la Nación son altamente perjudiciales; el gobierno ha insistido en que no puede deformarse la realidad chilena con un falso antagonismo entre el pueblo y las FFAA”. Y más adelante “en relación con las denuncias públicas sobre flagelaciones a miembros de la marina sometidos a proceso, he sido informado que algunos de estos han ejercitado las acciones legales ante los tribunales navales respectivos. Si hay culpables de torturas, serán sancionados (¿por quién? ¿por los mismos tribunales que torturaban?) En caso contrario serán castigados los que se hayan hecho responsables de imputaciones sin fundamento”. Después de este episodio escarmentador, si existían en las FFAA grupos dispuestos a defender al gobierno, debían darse por notificados del repudio del mismo Allende.

El 30 de agosto las FFAA allanaron un Centro de reforma agraria en la provincia de Cautín; en la misma caso del fundo 27 fueron torturados campesinos para que declararan que estaban preparando guerrillas. El gobierno guardó silencio.

En la primera semana de setiembre las FFAA desataron una oleada de allanamientos en las fábricas más impor-

tantes de Santiago. El día 7 atacaron con ametralladoras punto 30 la planta textil de Sumar-Nylon, hubo muertos y heridos. Todos los allanamientos tuvieron las mismas características de brutalidad y fueron tolerados en silencio por el gobierno. La revista mirista “Punto Final” que días antes pedía una dictadura popular de ese ejército y la UP, ahora se lamentaba amargamente “nadie desarma a los golpistas”. Los militares comprobaban que el proletariado estaba prácticamente desarmado y atado de pies y manos por la UP.

El 26 de julio –respondiendo al pacificador discurso de Allende del día anterior– la oposición desató su ofensiva final de masas contra el gobierno. Durante todo el mes de agosto los camioneros paralizaron el transporte y el comercio efectuó repetidos paros agravando el desabastecimiento de la población. El país estaba paralizado, los terroristas de “Patria y Libertad” actuaban tan impunemente, y asesorados por oficiales del ejército, que el 13 de agosto provocaron un apagón en casi todo el país mientras Allende hablaba por la red nacional de radio y televisión. La UP respondió encomendando al lobo el cuidado de las ovejas: para solucionar el conflicto del transporte Allende designó interventor al general Herman Brady, el actual jefe de estado de sitio en Santiago. Es fácil imaginar el empeño que puso este destacado golpista para terminar la huelga de los camioneros.

El 22 de agosto, por primera vez en tres años, se rompió el bloque que en todos los momentos críticos habían

formado el partido de la burguesía industrial (la DC) y los partidos de la burocracia del estado burgués y la pequeña burguesía (los que formaban la UP). La DC votaba con los nacionales una declaración en el Congreso en la que advertía que “el Ejecutivo ha quebrantado gravemente la constitución política del Estado” y llamaba a los ministros militares a “evitar avalar determinaciones políticas partidistas y encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho”.

Todavía no era un llamado directo al golpe porque la DC se había negado a apoyar el proyecto inicial de los Nacionales reservándose todavía un estrecho margen de maniobras para apoyar a Allende si éste, puesto ya al borde del abismo, se decidía a cambiar cualitativamente su política y otorgaba garantías a la burguesía industrial, entre las cuales, la primera era aplastar a los sectores más avanzados del proletariado. En los últimos días de agosto el general César Ruíz Danyau, destacado golpista que Allende había presentado a las masas como uno de los héroes de la jornada la noche del 29 de junio, contribuyó a agravar la situación en las FFAA presentando su renuncia como Ministro y Comandante de la FACH, pero declarando más tarde que había renunciado solamente a su cargo de Ministro, y que el presidente le había exigido la renuncia como Comandante. La derecha protestó acusando a Allende de darle carácter político a los cargos de jefes militares y Frei le recordó al Presidente que el Estatuto de Garantías Constitucionales le

obligaba a mantener la “profesionalidad de las FFAA”. Allende designó como sucesor de Ruiz en el comando de la FACH a Gustavo Leigh, el más derechista de los actuales miembros de la Junta Militar.

En la última quincena de agosto la oposición inició una campaña de actos públicos y recolección de firmas exigiendo la renuncia de Allende “para abrir paso a una nueva institucionalidad”. Amplios sectores de la pequeña burguesía —encabezados por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica— se pasaban abiertamente al golpismo y rompían con los mitos de la democracia republicana. La Democracia Cristiana apoyaba la campaña pero ofreciendo todavía a Allende la opción de “rectificar rumbos”. Esta campaña culminó el 6 de setiembre con una gigantesca concentración de mujeres opositoras en la que las principales oradoras exigieron al Presidente que “rectificara su política o renunciara”. Simultáneamente se efectuaban repetidas manifestaciones de mujeres de altos oficiales frente al Ministerio de Defensa y la residencia privada del Comandante del Ejército, general Carlos Prats, exigiendo su renuncia “porque era el único obstáculo que faltaba remover”. ¿Para qué? Evidentemente para un golpe de estado sin fisuras en las FFAA. Prats decidió de inmediato dejar el camino libre a los golpistas y renunció declarando que él “no podía dividir al ejército”. Esta actitud que bordeaba la complicidad con el golpismo fue presentada por Allende como un gesto “patriótico e

histórico”. Los diarios de la UP publicitaron en primera plana una carta de Tomic a Prats, en la que aquel lo equiparaba con O’Higgins. El día 25 de agosto Allende designó comandante del ejército a Augusto Pinochet, el comando del golpe quedaba integrado.

La UP organizó una concentración de masas para rendirle homenaje al general que se iba para facilitar la unidad del ejército. La clase obrera fue convocada a esta farsa pero sólo asistieron grupos de obreros controlados muy estrechamente por el PC y el PS. Al día siguiente los diarios opositores se solazaron mostrando la foto de la silla que estaba reservada para el general Prats que permaneció vacía porque el “patriota” no concurrió al homenaje. El 4 de setiembre el comandante de la Marina, contralmirante Montero presentó su renuncia porque el hombre designado por la oficialidad, del arma para ocupar su lugar en el comando golpista era Toribio Merino. Allende intentó una última maniobra para impedir que el comando se constituyera: rechazó la renuncia de Montero. Esa misma tarde concurrió al desfile de masas organizado para festejar el tercer aniversario de su triunfo electoral. Un multitudinario desfile de muertos pasó frente a la tribuna donde los dirigentes no pronunciaron ningún discurso porque ya nada tenían que decir a las masas. Algunas obreras y obreros lloraban, otros marchaban cabizbajos, había pocos gritos y consignas, la clase obrera se sentía derrotada siete días antes del golpe final. Allá arriba, en los palcos en los que se notaba la

ausencia de los cuatro ministros militares, los que la habían llevado a esa derrota permanecían impávidos, mirando al frente, conocedores del final cercano. Al día siguiente el general Torres de la Cruz, el que había dirigido el allanamiento contra Lanera Austral, advirtió a la izquierda, en una declaración que sirvió de modelo al lenguaje de la Junta Militar días más tarde, que “las FFAA no se darían descanso en su afán de descubrir y sancionar a los chilenos indignos y a los extranjeros indeseables”.

El domingo 9 la Democracia Cristiana hacía un último intento por salvar a la burocracia política chilena, una casta que había sobrevivido desde hacía 160 años, fecha en que se fundó el Congreso Nacional, y que había servido de cemento para mantener el bloque UP-DC hasta días antes. Un plenario de dirigentes nacionales y provinciales ofreció a Allende la renuncia simultánea de todos los diputados y senadores si él presentaba la suya, para posibilitar un nuevo llamado a elecciones. La UP, con su lenguaje proverbial respondió: ¿Renuncia? ¡NICA!⁶

⁶ Nica: expresión popular chilena que significa “ni cagando”.

El día 11

En toda la historia de la Operación Unitas, hubo sólo tres años durante los que ésta pudo desarrollarse en Chile sin grandes manifestaciones de repudio, pasando casi desapercibida para la gran mayoría de la población. Eso sucedió durante los tres años de gobierno “antiimperialista”. Es que otra de las técnicas de la UP para seducir a los militares fue facilitar al máximo sus relaciones con el Pentágono. Días después del tancazo —por ejemplo— un insólito artículo apareció en La Nación, diario del gobierno. Un gran titular anunciaba: “Importante cambio de política financiera de EEUU hacia Chile”, y abajo se señalaba como un síntoma sumamente alentador que el Secretario de Estado norteamericano había anunciado la concesión de un crédito importante a Chile para la venta de material de guerra, en especial, ¡30 aviones antiguerrilleros! El articulista se deleitaba describiendo las características de esos aviones y el servicio que le prestarían a las FFAA.

En los primeros días de setiembre los barcos de guerra de la marina de EEUU, destinados a la Operación Unitas, se movieron con toda comodidad por las costas y puertos chilenos. La única manifestación que podría interpretarse como una velada crítica, fue la reproducción en el diario La Nación de un artículo de “Nuestra Palabra”, órgano del PC Argentino, en el que se criticaba la participación

de la marina argentina (!) en el operativo.

De las tres ramas de las FFAA, la Marina era la “vanguardia” del golpe. El Contralmirante Huerta había renunciado al gabinete de Allende en noviembre del 72 haciendo públicas sus críticas al proyecto de reforma de la educación (otra batalla que perdió la UP y permitió a la oposición ganar amplios sectores de la pequeña burguesía) y desde ese momento conspiraba abiertamente. Toribio Merino, que en 1972 había sido designado por Allende, Intendente de Valparaíso y que durante seis meses se había dedicado con el apoyo de la UP a perseguir en el puerto a la “ultraizquierda”, ahora, como fiscal naval, montaba la provocación de la “subversión en la Armada” y pedía el desafuero del diputado Garretón y el senador Altamirano. Ese mismo personaje, días antes del golpe, reunió a los mandos de la Marina y les hizo votar una resolución golpista pidiendo la remoción del comandante Montero el que, por un resto de pundonor no quería aparecer encabezando un golpe después de varios meses de integrar el gabinete. En una reunión en La Moneda, Merino le había advertido con insolencia a Allende: “la Marina es anti-marxista por esencia”. El MIR denunció públicamente la realización de reuniones conspirativas con la participación de jefes de la Armada norteamericanos en los barcos de la Operación Unitas y la incorporación de un oficial de inteligencia norteamericano en cada buque de la armada chilena. La Marina ni se tomó el trabajo de desmentir la denuncia. La UP

permitía que se llevaran a cabo todos estos preparativos sin denunciarlos, es que ahora el golpe se preparaba seriamente y no se podía jugar con denuncias destinadas a impedir la discusión ideológica en el seno de la UP como se había hecho decenas de veces anteriormente.

El día 10 la escuadra chilena simuló zarpar del puerto de Valparaíso para incorporarse al Operativo Unitas; por la noche regresó y bloqueó la entrada a la rada. Inmediatamente Allende fue notificado del regreso de la escuadra.

Esa misma noche todos los jefes militares pernoctaron en el edificio del Ministerio de Defensa ubicado frente a La Moneda. Sus automóviles permanecieron estacionados frente al edificio para que los viera quien quisiera.

En la madrugada del 11 el ejército hizo un operativo en Concepción, baluarte tradicional del mirismo, y detuvo a 600 militantes a los que trasladó a la isla Quiriquina.

A las siete y media de la mañana del 11, el ministro de defensa de Allende, Orlando Letelier, se dirigió al Ministerio donde fue detenido. Periodistas fotografiaron su salida del edificio –frente a La Moneda– custodiado por soldados.

Pocas veces un golpe de estado se preparó y se consumó más abiertamente. Sin embargo el 11 a. las 8 y media, cuando todos estos movimientos ya se habían efectuado, Allende habló desde La Moneda para comunicar solamente que “había algunos problemas en Valparaíso”, recomendó al pueblo mantener la calma y “esperar la

reacción de los soldados de la patria”. Esta vez no llamó a ocupar las fábricas, al contrario, consciente quizás de que el golpe era inevitable llamó a los obreros “a no dejarse masacrar”. Desde ese momento trató, una vez más, de resolver la crisis mediante negociaciones. Citó a los comandantes de las tres armas a la Moneda, quienes, por supuesto, no concurrieron. Versiones no confirmadas dicen que cuando recibió la amenaza de que La Moneda sería bombardeada desestimó esa posibilidad afirmando que ese era un “golpe a la chilena”, que el bombardeo no se efectuaría y que tenía informes de que el general Pinochet con sus tropas rodeaba la base aérea del Bosque para impedir la partida de los aviones. Ya hacía dos horas que las radios de oposición transmitían el primer bando de la Junta Militar firmado por Pinochet como comandante de la misma.

Informes no oficiales indican que el bombardeo de La Moneda fue dirigido por el general Magliochetti, el hombre que gozando de la confianza personal de Allende había sido Ministro de Transporte hasta ese mismo momento y había declarado en un programa de televisión, días antes, que Fidel Castro, de quien había sido edecán durante su visita a Chile, “era un líder revolucionario sincero”.

La conducta de Allende al morir heroicamente en La Moneda se ha convertido en un mito inatacable consagrado por toda la prensa comunista que de esta forma busca borrar tres años de desaciertos que con-

dujeron al proletariado chileno a su más grave derrota. Por desgracia, a la izquierda del reformismo, también hay gente que considera rentable explotar la imagen del reformista Allende muriendo heroicamente, metralleta en mano, frente al fascismo. Allende fue un reformista burgués hasta el fin. Sus últimas palabras formalmente dirigidas “al pueblo” las concibió, en realidad, pensando en lo que registrarían los historiadores: no hubo en ellas una sola directiva concreta para las masas que habían confiado en él y que quedaron libradas a su propia suerte cuando días más tarde el grueso de los dirigentes de la UP corrió a refugiarse en las embajadas. El “compañero presidente” murió defendiendo el símbolo máspreciado de la democracia burguesa chilena, La Moneda; advirtió en su discurso de despedida que su holocausto cubriría de vergüenza a los políticos burgueses que no habían sabido cumplir con su supuesto deber de defender la democracia. Propósito fallido porque cualquiera sabe que los políticos burgueses no tienen vergüenza (y por supuesto, ningún deber de defender la democracia). No murió peleando junto a los obreros de los cordones industriales a los que combatió hasta último momento como “economicistas”, “ultraizquierdistas” y “divisionistas”, pero que fueron los únicos que hicieron un desesperado intento de defender su gobierno. Su gesto cae muy bien en un continente donde, desde hace 13 años los jóvenes de la pequeña burguesía revolucionaria creen distinguirse del reformismo cuando en realidad se

limitan a convertirse en su brazo armado. Fue, en fin, profundamente desmovilizador: por una parte, allá en el cielo de los héroes, estaba el titán burgués peleando solo contra los aviones y la metralla mientras las masas eran destinadas al papel de espectadores pasivos. Sólo cuando la batalla entre los campeones del Olimpo ya estaba definida, las masas fueron convocadas a su propio holocausto. Cuando La Moneda estaba perdida y Allende asesinado, la CUT llamó a los obreros a ocupar las fábricas y a defenderlas. El reformismo cumplía hasta el fin su misión histórica de destruir lo mejor del proletariado. Durante los treinta días que precedieron al golpe inmovilizó a la clase obrera, escondió en los sótanos sus armas por temor a perder el control de la situación y cuando ya la suerte estaba echada, llamó al proletariado desarmado a hacer una guerra de posiciones contra un ejército moderno equipado con artillería, tanques, aviones supersónicos y helicópteros de combate. La Junta Militar agradeció el servicio: al presidente de la CUT y Ministro de Trabajo de Allende, el comunista Jorge Godoy, se le ofreció la vida a cambio de una declaración cobarde y divisionista. Entonces, el que desde todas las tribunas había tronado contra el fascismo apareció el 11 a las 5 de la tarde, mientras se combatía en cada manzana de Santiago, por la red de radio y televisión de las FFAA y Carabineros de Chile para condenar a los extremismos de izquierda y derecha y manifestar que ellos (¿quién?, ¿el PC?) estaban dispuestos a participar, en la medida

en que se los convocara para esa tarea en la lucha por el aumento de la producción. El traidor goza hoy de un trato especial en el Estadio Nacional y seguramente su vida será respetada como la de sus camaradas de la dirección del PC. Peor suerte que la de los hombres íntegros que supieron morir heroicamente.

El plan golpista era eliminar físicamente, mediante el asesinato o la prisión, a los destacamentos más avanzados de la clase obrera; para eso, era necesario separarlos de la masa cuyo destino sería continuar vendiendo su fuerza de trabajo en la etapa de la “reconstrucción”. La UP ya había creado las condiciones políticas para esa tarea. Al librar la lucha contra el “economismo” había separado a la vanguardia de la masa, llevando a aquella –en lugares como El Teniente– a jugar el papel de crumira de las justas reivindicaciones de la clase obrera. Los sectores más politizados se habían ido separando así de las masas más atrasadas políticamente pero que conservaban intacto su instinto de clase. La inteligencia política de la vanguardia engañaba a su instinto de clase; de esa forma, esos obreros se consideraban soldados de la “batalla de la producción”, de la lucha contra “el economicismo” y el “ultraizquierdismo”, cuando en realidad debían ser soldados del socialismo. De esa vanguardia que perseguía objetivos extraños a su misión histórica y que luchaba activamente contra los intereses inmediatos de los trabajadores en aras de una hipotética “vía chilena al socialismo”, las masas se sentían cada vez

más separadas. El alto porcentaje de votos obtenidos en las elecciones, ocultó este proceso a los dirigentes de la UP, electoralistas y parlamentarios hasta la médula. Creyeron que cada voto significaba un apoyo activo; no fueron capaces de ver que las masas habían apoyado a sus candidatos porque no tenían otra opción, pero la clase obrera tenía ya una profunda fisura que el conflicto del cobre ahondó. La burguesía y las FFAA, que cuando se trata de defender sus intereses son capaces de ver más objetivamente que los pequeñoburgueses que viven de ilusiones, fueron tomando el pulso, paso a paso, a este proceso de distanciamiento de la UP con las masas. Lo alentaron por todos los medios sin que los que estaban presos en las contradicciones de la “vía chilena” pudieran hacer nada por evitarlo. Como en una tragedia griega cada protagonista cumplió inexorablemente, hasta el fin, el papel que le estaba destinado.

Los propósitos proclamados por el programa de la UP eran atraer al campesinado y a la “burguesía nacional” para lograr una aplastante mayoría nacional que permitiera cumplir el programa por medios pacíficos. El reformismo persigue, a 56 años de la revolución rusa, un objetivo imposible, ganar a sectores de la burguesía para un programa “democrático avanzado”. En ‘realidad trata de engañar a esos sectores de la burguesía para que en una primera etapa marchen “junto al proletariado”, creando las condiciones para liquidarlos en el futuro. Durante tres años la prensa de la alta burguesía desnudó

diariamente esta táctica infantil, mostrando lo que les ocurría a los pequeños propietarios cuando se desataba la revolución socialista, recurriendo a los numerosos ejemplos históricos que proporciona nuestro siglo. La UP sólo consiguió engañarse a sí misma y desorientar al proletariado. Durante su gobierno, gracias a leyes protectoras y al desarrollo de la especulación y el mercado negro, los profesionales, pequeños comerciantes e industriales y la burguesía agraria se enriquecieron más que nunca. Acumulaban cantidades de dinero que no reinvertían como capital porque no consideraban seguras las condiciones de reproducción. Con dólares en los bolsillos, los pequeñoburgueses estaban furiosos e impacientes esperando que se crearan las condiciones para transformarlos en capital. Estas condiciones eran el derrocamiento del gobierno y el descabezamiento del proletariado. Mientras la UP predicaba su política de unión con las “capas medias”, estas capas proporcionaban los grupos de choque de la burguesía, se movilizaban por cientos de miles en las calles, paralizaban el transporte, el comercio, los servicios médicos y lesionaban seriamente la producción agropecuaria. La “unión” devenía en patético aislamiento del proletariado. Este aislamiento se hizo total y definitivo cuando la UP logró separar de la clase obrera a su aliado tradicional, el campesinado. “Avanzando por la vía chilena” el gobierno se propuso “aprovechar” la ley de reforma agraria promulgada por la Democracia Cristiana, para liquidar el latifundio. Una

vez más, la UP liquidaría a la burguesía con sus propias leyes. Estas consideraban expropiables a todos los predios superiores a las 80 hectáreas de riego básico –la mayor parte de la agricultura chilena es de regadío, según las características de la zona y de las obras de riego se establece la unidad “hectárea de riego básico”– pero estableciendo rigurosas indemnizaciones para los propietarios y el deber del Estado de pagarles las maquinarias y las obras de infraestructura expropiadas. El movimiento campesino que venía desarrollándose desde la administración de Frei dio un salto espectacular durante los dos primeros años de gobierno de la UP; éste pensaba completar su programa de expropiaciones en cuatro años, pero se vio obligado por las tomas y ocupaciones a hacerlo en menos de dos. A fines de 1972 no quedaban en Chile fundos de más de 80 hectáreas sin expropiar. Las expropiaciones se hicieron dejando el antiguo terrateniente una reserva de 80 hectáreas en la que, como el Estado no tenía dinero para pagarlas pese a que en 1972 se destinaron 1.300 millones de escudos para la reforma agraria, quedaban todas las maquinarias, el ganado y las instalaciones; de esta manera se “forzaba” al terrateniente a convertirse en capitalista agrario, se eliminaba el régimen de inquilinato pero en la reserva el nuevo capitalista podía utilizar el dinero de la indemnización para comprar más maquinaria y contratar obreros agrícolas. Los resultados se apreciaron de inmediato: la productividad de ese sector fue varias veces más alta que la del sector reformado

que no tenía máquinas ni dinero. En los campesinos sin tierra la UP alentó las ambiciones de propietarios privados pero no las satisfizo. Una lucha sin resolución se desarrolló en el interior de la UP: por una parte un sector del PS, el MAPU y el MIR eran partidarios de crear haciendas estatales y cooperativas; por la otra el PC insistía en las cooperativas y en entregar la tierra en propiedad a los campesinos, posición coherente con el conjunto de la política de la UP. La posición de la “izquierda” impidió que durante tres años se adoptara una solución definitiva. Como medida intermedia se crearon los Centros de Reforma agraria, en los que los campesinos tenían derecho a un pequeño predio para la explotación individual pero la cuestión de la tenencia del resto de la tierra no se resolvía hasta que el Congreso no legislara sobre el asunto.

Terminado el proceso expropiatorio la movilización campesina se detuvo y comenzaron a aflorar las contradicciones propias del capitalismo agrario. Los campesinos desviaban el grueso de su producción al mercado negro o al contrabando (el dólar estaba subvaluado), ayudados por los comerciantes privados que controlaban el 80 % de la comercialización de los productos del agro. La UP se lamentaba de la “falta de conciencia de los campesinos”. En el sector reformado los nuevos propietarios o los titulares de los CERA explotaban despiadadamente a los obreros agrícolas y estos no encontraban apoyo en los partidos de izquierda para organizar sindicatos, porque

estos preferían poner el énfasis en los consejos comunales campesinos, dirigidos, en la mayoría de los casos, por campesinos medios y ricos. La primera manifestación política de este proceso fue la virtual desaparición del Movimiento Campesino Revolucionario que, bajo la dirección del MIR había tenido importancia en el proceso expropiatorio. La democracia Cristiana explotó la situación insistiendo en la propiedad privada de la tierra y pocos días antes del golpe envió al Congreso un proyecto de Reforma

Constitucional que obligaría, al gobierno a entregar los títulos de propiedad. Pocos días después la inefable Marta Harnecker desvariaba en “Chile Hoy” sobre la movilización campesina y la firme posición antigolpista de las masas agrarias. Lo cierto es que a esa altura lo único que querían los campesinos es que alguien les garantizara la propiedad de la tierra y no podían depositar confianza –en ese sentido– en los partidos de la UP. Por supuesto que existían núcleos de campesinos “concientizados” que apoyaban a la UP, pero la masa campesina no estaba dispuesta a jugarse por un gobierno que se había mostrado renuente para entregarle los títulos de propiedad. Como en la Francia de Bonaparte fue el sable militar el que se presentó ante esa masa como la garantía de que sus aspiraciones serían respetadas: pocos días después del golpe la Junta Militar prometió que a todos los campesinos se les entregarían los títulos de propiedad.

El día 11 el escenario estaba preparado para el golpe final contra el proletariado consciente, éste estaba sólo, separado del campesinado, enfrentado a las “capas medias” y con la hostilidad de los sectores menos politizados de la clase obrera. Los obreros conscientes sumaban cientos de miles, pero las revoluciones las hacen millones.

A las dos de la tarde del día 11 la Junta Militar emitió dos bandos: en uno se ordenaba a los obreros desocupar las fábricas, en el otro se decretaba toque de queda a partir de las tres de la tarde, éste duró después 45 horas, hasta las doce del día 13. Los militares querían enfrentarse solamente con los obreros de la UP y le otorgaban al resto una hora de tiempo para retirarse del campo de batalla. Entre las dos y tres de la tarde largas columnas de obreros caminaban hacia sus hogares. En las fábricas quedaron los activistas de la UP, la consigna de la CUT era defenderlas como fortalezas medioevales, el estado de ánimo “morir heroicamente como el compañero Allende”.

Resistencia y represión

En dos días de heroica resistencia la cabeza del proletariado chileno rodó por el suelo. Sin dirección, librando una guerra de posiciones contra un ejército moderno, sin armamento porque el reformismo había usado la consigna de “armamento popular” sólo para asustar a la

burguesía, sorprendido por el aluvión de hierro y fuego que llovía sobre su cabeza disparado por los generales “allendistas” cuya incorporación al gobierno había sido celebrada como un triunfo, aislado de las masas de obreros menos politizados y del campesinado, enfrentado al grueso de la “clase media” que apoyó activamente —mediante la delación— a la represión, el destacamento más politizado del proletariado santiaguino resistió sin coordinación, aislada y heroicamente durante tres o cuatro días. El día 11 la Junta Militar citó, mediante un bando, a los principales dirigentes de la UP y funcionarios de gobierno; la mayoría de los hombres que había jurado hasta esa mañana que “el fascismo no pasaría”, se entregaron mansamente. Otros —menos confiados al destino que les reservaban los militares— corrieron a buscar refugio en las embajadas. Desde el 30 de junio al 11 de setiembre no hubo un sólo día en que no apareciera en los diarios de la UP un artículo mofándose de las “ratas fascistas de Patria y Libertad” que luego del fracaso de la intentona de Souper buscaban asilo en las embajadas. Es indefendible la actitud de gente que empujó hasta último momento al proletariado a un enfrentamiento suicida y que —cuando éste se produjo— pensó solamente en salvar su pellejo (y, en algunos casos, además sus dólares). La dirección del MIR fue la única que pasó a la clandestinidad para continuar la resistencia. Por otra parte esta organización era la única que tenía el aparato necesario para hacerlo, el resto de la izquierda había creí-

do tanto en sus propias mentiras que no tenía la menor preparación para esa emergencia. Un hecho demuestra el grado de ingenuidad de esa gente. El plan de defensa de la residencia presidencial de Tomás Moro comenzaba diciendo que, teniendo en cuenta la situación política nacional, el enemigo estaría integrado por “formaciones irregulares”. No estaba prevista siquiera la posibilidad de un enfrentamiento con tropas regulares: la lealtad de las FFAA estaba descontada. No es extraño entonces que bastaran unos pocos rockets disparados por aviones y helicópteros para que ese plan, cuidadosamente elaborado por especialistas durante años y para el que se contaba con los medios de guerra necesarios, se desmoronara en pocos minutos.

El PC no fue capaz de mantener en la clandestinidad durante más de 15 días a su Secretario General. Luis Figueroa, miembro de su comisión política y presidente de la CUT, se refugió en una embajada. Frente a la salvaje represión desatada el día 11 los partidos de izquierda se comportaron en formas diferentes. La mayoría de los dirigentes del PS se entregaron a los militares o se refugiaron en las embajadas, pero los cuadros medios de la izquierda socialista tuvieron un comportamiento heroico y sobrellevaron el castigo mayor; ellos fueron los que intentaron dar dirección a la resistencia en las fábricas y barriadas.

El PC no ofreció resistencia seria. En las fábricas en que tenía mayoría no hubo lucha y los militares entraron sin

oposición. No podía faltar el detalle pintoresco propio de las extraviadas mentes de sus dirigentes: impartieron órdenes a sus militantes de no romper sus carnets y de llevarlos encima. Miles de ellos cayeron presos en sus lugares de trabajo, sin oponer resistencia, pero con el carnet y el brazalete del partido (que había servido para actuar como fuerza de orden contra la “ultraizquierda” en las manifestaciones) en el bolsillo. Luego de ser forzados a comérselos fueron trasladados a los campos de concentración.

El MIR dio órdenes de replegarse en orden y combatiendo. Sus militantes combatieron junto a los obreros pero —conscientes de que la derrota del reformismo era inevitable— se retiraban en orden cuando la resistencia era imposible. Gracias a esta línea tuvieron pocas bajas y conservan intacta su organización en la clandestinidad. Las FFAA advirtieron que no tomarían prisioneros. Aquel que fuera sorprendido resistiendo sería fusilado en el acto aunque se rindiera. Por una vez en su vida los generales chilenos cumplieron su palabra. Más de doscientos integrantes del GAP que combatieron al lado de Allende en la Moneda, luego de su rendición, fueron trasladados a campos de exterminio donde se los fusiló. En todas partes, cuando alguien era encontrado en posesión de un arma, si ésta había sido disparada se lo fusilaba; si no había sido disparada el oficial al mando efectuaba un disparo con ella y luego venía el fusilamiento. El que era sorprendido pintando consignas contra la junta era

fusilado en el mismo paredón. En los cuatro primeros días se combatió en todas las calles y barrios de Santiago, Durante las 24 horas se oía el tronar de la artillería y las respuestas de las armas livianas empuñadas por los obreros. Al amanecer, las descargas sin respuesta de los pelotones de fusilamiento.

En las fábricas la situación de los combatientes era desesperada. Para terminar su obra criminal y prolongar la agonía de los obreros, el día 12 radio Moscú, emisora escuchada por los combatientes, propaló la falsa noticia de que el general Prats marchaba desde el sur sobre Santiago al frente de sus tropas. Había que continuar resistiendo para ayudar a “los soldados de la patria”. La Junta militar chilena, más humanitaria al fin que los burócratas del Kremlin, presentó el día 13 ante las cámaras de televisión a un general Prats tembloroso y balbuceante, con las manos presumiblemente esposadas bajo el escritorio, que aseguró que no tenía la menor idea de encabezar nada contra la Junta y que el día 10 (¿conocedor de la inminencia del golpe?) había solicitado permiso para ausentarse del país, permiso que ahora solicitaba nuevamente. Dos días más tarde un veloz automóvil cruzaba la frontera y lo depositaba en un cuartel de la gendarmería argentina.

Durante esos días el tradicional chauvinismo de los chilenos se transformó en abierta xenofobia. El general Bonilla dijo por televisión que “no dejaría piedra sobre piedra hasta que el último extranjero (sic) abandonara

territorio chileno”. Aviones de la FACH volanteaban Santiago llamando a la población a “denunciar a los extremistas” y advirtiendo que “no habrá piedad para los mercenarios extranjeros que han venido a asesinar chilenos”. Los vecinos denunciaban a los extranjeros para que fueran trasladados a los campos de concentración y luego procedían a tomar por asalto sus casas para saquearlas. La población La Legua, cercana a la fábrica textil Sumar, fue uno de los focos más serios de resistencia. Durante cuatro días los militares no pudieron entrar en ella porque cada intento era duramente resistido: un ómnibus de carabineros y dos tanquetas fueron destruidos por los combatientes; las mujeres y los niños arrojaban agua hirviendo a los carabineros. Al cuarto día los obreros decidieron retirarse pero cometieron el error de dejar algunas mujeres y niños. Los soldados entraron a la población, pusieron a decenas de mujeres y niños en fila y los fusilaron. Dos días después, cuando algunos pobladores retornaron a sus hogares el ejército los rodeó nuevamente con tanques; esta vez entró el general Bonilla rodeado de corresponsales extranjeros para mostrar que las noticias de un supuesto bombardeo a la población eran falsas. Luego de las experiencias vividas ¿qué poblador se atrevería a denunciar la masacre delante de los militares? Este show miserable, mediante el que se engañaba sólo el que quería ser engañado se repitió en cada una de las poblaciones masacradas. Cuando los obreros en las fábricas enarbolaban la bandera de rendición, el ejército

entraba, los hacía formar fila en el patio y un oficial seleccionaba a los que “habían hecho resistencia”; estos eran fusilados delante de sus compañeros.

El Estadio Chile, un estadio de box y básquetbol, fue el primer campo de concentración habilitado por la Junta. Cuatro mil detenidos fueron ubicados en las butacas, los considerados “peligrosos” –todos los extranjeros entre ellos– tuvieron que permanecer 48 horas boca abajo, en el suelo, con las manos en la nuca, sin poder moverse, haciéndose sus necesidades encima, sin comer ni beber. Los soldados caminaban encima de ellos y pasaban carretillas cargadas con ladrillos sobre sus cabezas. A la luz artificial del Estadio se agregaron reflectores antiaéreos que durante las 24 horas del día enceguecían a los detenidos, estos oían permanentemente el ominoso sonido de los disparos con que en los sótanos se fusilaba a los condenados. El primer día un niño de 10 años fue fusilado ante los 4.000 detenidos como advertencia. El folklorista Víctor Jara gritó: “Patria o Muerte. Venceremos”, los militares comenzaron a golpearlo salvajemente delante de los prisioneros; su cadáver, horriblemente mutilado y sin ningún disparo apareció en la excavación del metro al día siguiente. Los diarios anunciaron púdicamente su muerte sin mencionar la causa.

Oficiales del Ministerio de Defensa barajaban una cifra de 12.000 muertos en la primera semana. En los campos de concentración habilitados apresuradamente se agolparon alrededor de 20.000 prisioneros. Debe tenerse

en cuenta que Chile tiene nueve millones de habitantes, de modo que — proporcionalmente— los militares produjeron el “Yakarta” que prometieron a través de sus amigos “nacionales” meses antes. La magnitud de la masacre guardó relación directa con la tensión que se había acumulado entre las clases en los últimos meses. La clase obrera había tomado en serio el palabrerío “izquierdista” de los dirigentes y había sobrepasado los límites que estos querían imponerle. El programa de la UP contemplaba la estatización de 150 fábricas en todo el período de Allende. Cuando se produjo el golpe pertenecían al “área social” 310 fábricas que habían sido intervenidas para responder a las exigencias de la clase obrera que las había tomado desobedeciendo los llamados a la disciplina de la dirección. Muchos centenares más habían sido devueltas por el gobierno, pero los obreros las habían ocupado nuevamente creando una situación irregular que La UP no podía resolver porque para ello era necesario emplear los métodos que después utilizó la Junta.

Los partidos de la burguesía que hasta el 11 de setiembre habían combatido al gobierno más democrático de la historia chilena y latinoamericana... en nombre de la democracia y la libertad, se apresuraron a apoyar a la Junta Militar.

El Partido Nacional se autodisolvió aconsejando a sus miembros colaborar con el nuevo gobierno. De esta forma le sugería a los militares la necesidad de disolver

todos los partidos políticos y perpetuarse en el poder. Este partido de terratenientes, financistas e industriales asociados al imperialismo no tiene nada que ganar en la lucha política, y prefiere una dictadura militar.

El Partido Demócrata Cristiano, representante de los intereses de la burguesía industrial, hasta el 22 de agosto había respaldado al gobierno en la medida en que éste recuperaba para la burguesía chilena las riquezas básicas, efectuaba una reforma agraria capitalista y lesionaba los intereses del capital financiero internacional; pero lo había combatido para defender a la burguesía industrial tratando de contener el avance de la clase obrera sobre las empresas de capitales nacionales. De ahí que su táctica apareciera como “centrista”, ya que para ponerle límites a los afanes estatistas de la burocracia burguesa y a los ataques del proletariado debió aliarse frecuentemente con el Partido Nacional; pero para posibilitar que la “revolución agraria y antiimperialista” continuara hasta los límites que convenían a la burguesía nacional, apoyó en cada momento crítico al gobierno. Producido el golpe este partido tenía que reacomodarse ante la nueva situación, aceptando la derrota de su aliado y colocándose en condiciones de influir a los militares para impedir que favorecieran los intereses de los terratenientes y el capital financiero en desmedro de la burguesía industrial y comercial. Apoyó el golpe pero preparándose para discutir en el futuro las medidas económicas de la Junta. Sólo un pequeño grupo sin influencia interna amagó con una tibia defensa de

los derechos humanos. Bernardo Leighton, fundador del partido y viejo aliado de la UP, presentó un recurso de hábeas corpus para varios funcionarios del gobierno anterior que estaban detenidos en lugares desconocidos. La Corte Suprema de Justicia –que en época de Allende había posado de campeona de la justicia y la defensa de los derechos humanos, hasta el punto de destacar un juez en el Cuartel de Investigaciones a las pocas horas de la detención del fascista-terrorista Thieme para “evitar que se lo sometiera a apremios ilegales”– respondió al hábeas corpus con una comunicación de cuatro líneas aclarando que, de acuerdo a las facultades que otorgaba el estado de sitio en tiempo de guerra, las FFAA podían hacer lo que quisieran con sus prisioneros. Así terminó la defensa de las libertades de la Democracia Cristiana.

Dos días después que el secretario general de la Junta Militar declarara que había 500 muertos y 6.000 detenidos (cifra muy inferior a la real), el ex ministro de defensa del gobierno de Frei, Sergio Ossa, salió en Colombia en defensa de las FFAA y aseguró que en Chile no había más de 95 muertos y que no había detenciones masivas. Estas declaraciones fueron publicadas en Chile en el diario “La Prensa”, órgano del PDC.

Pero los militantes del PC educados durante años en el embrutecedor mito del carácter democrático de la Democracia Cristiana no se resignaban a una realidad que no se ajustaba a su ideología oficial. El día 29 de setiembre un grupo de cuadros de este partido comen-

taba con entusiasmo –en el Estadio Nacional donde se encontraban detenidos– la noticia de la formación de un nuevo “partido socialcristiano” encabezado por Tomic, el hombre del pacto secreto con Allende en 1970, pacto según el cual ambos se comprometían a cerrarle el camino al candidato nacional en el caso que obtuviera la primera mayoría; el político que había viajado a China en 1972 y había vuelto rodeado de la adulación de la prensa de la UP; el aliado fiel que según los esquemas tácticos del PC dividiría a la DC si ésta se embarcaba en una “aventura golpista”. Según los ingenuos cuadros del PC el nuevo partido “socialcristiano” arrastraría a las bases de la DC hastiadas de la colaboración de Frei con la Junta Militar. Ese mismo día 29, Tomic declaraba a “La Stampa”, “Il Messaggero” y “Corrieri della Sera” de Italia, que “no todo es negativo en el movimiento desencadenado el 11 de setiembre por dolorosos que hayan sido algunos de sus aspectos (?) para muchos chilenos. Por varios motivos la situación anterior era insostenible (...) la experiencia de la UP había fracasado. Fue la *consecuencia inevitable* (el subrayado es nuestro) de los errores capitales contenidos en el programa político inicial y su realización política, social y económica”. Más adelante Tomic defendía a Frei y desmentía terminantemente la formación del “partido socialcristiano”. Los comunistas deberían resignarse a seguir buscando un burgués democrático.

El cardenal Silva Henríquez, aliado del PC hasta pocos días antes, atribuyó la declaración del Papa lamentando

los sucesos de Chile, a una errónea información y afirmó el carácter democrático y humanitario de las FFAA chilenas. El Congreso Nacional aceptó sin hesitaciones su disolución.

Como veremos enseguida, todo esto no impide que los PC de todo el mundo sigan apelando a los “sectores democráticos de la burguesía y la Iglesia”. Dos semanas después del golpe, el comandante de carabineros e integrante de la Junta, general Mendoza, anunció que la primera etapa de la represión había terminado y que comenzaba “la verdadera limpieza de extremistas”. En la “primera etapa” la Junta había prometido no efectuar despidos masivos de trabajadores por razones ideológicas y no atacar sus conquistas económicas y sociales. Estas falsas promesas buscaban aislar a los combatientes de su base social; exterminados los primeros el peso de la represión comenzó a caer sobre la segunda.

A fines de setiembre el rector de la Universidad, un demócrata cristiano golpista que cuidaba su imagen “presidenciable” y no quería comprometerse en una purga en la universidad, fue reemplazado por interventores militares menos prejuiciosos. Patrullas militares comenzaron a presentarse en todos los lugares de trabajo con listas de los simpatizantes de la UP y se los llevaban detenidos a los campos de concentración; a partir de ese momento todos quedaban sin trabajo.

En los campos de concentración los militares siguen la siguiente política: el personal de custodia trata correcta-

mente a los prisioneros y permite visitas de corresponsales y parlamentarios extranjeros quienes atestiguan –cínicamente– que los detenidos gozar de buen trato. El personal del servicio de inteligencia tortura salvajemente a los militantes de base –en especial a las mujeres y a los adolescentes– para arrancarles falsas declaraciones incriminando a los cuadros medios y a los dirigentes. Con esto se persigue un doble propósito: desmoralizar a los militantes de base y formar un grueso expediente con acusaciones falsas contra los dirigentes para que los Consejos de Guerra los condenen al fusilamiento o a largas penas de prisión. A estos futuros condenados se los tortura solamente en casos excepcionales, los militares saben que por la fuerza de los criterios clasistas los periodistas y personalidades que visitan los campos se preocupan por la suerte de los dirigentes y no por la de los anónimos militantes de base. Aquellos gozarán de “todas las garantías que otorgan los tribunales militares en tiempo de guerra” (!?). En las zonas donde hay menos control internacional, diariamente se aplica la “ley de fugas” a decenas de personas, los diarios oficialistas informan de estos asesinatos en notas que parecen todas salidas de la misma matriz.

En esta “segunda fase” de la represión (en realidad, es la tercera porque como vimos, la primera empezó durante los últimos días del gobierno de Allende), comenzó la agresión económica contra las masas. El presidente de la Junta, general Pinochet, anunció que el costo de la vida

aumentará, a fin de año, en un 1.600 %, a esta altura ya debe estar cerca de esa cifra. El salario promedio de un obrero industrial en época de Allende era de ocho dólares al mes (esta era La base material del “economismo” que la UP reprochaba a la clase obrera); la Junta ha congelado los salarios y ha establecido penas de tres a veinte años de presidio mayor para los que inciten o hagan huelgas. Esta brutal agresión al nivel de vida de las masas obedece a la necesidad de corregir las distorsiones que introdujo el proyecto reformista de la UP en el mercado capitalista. El dólar estaba subvaluado hasta tal punto que la importación de artículos alimenticios y bienes industriales se hacía con el cambio, un dólar: setenta escudos; mientras que la cotización real era de un dólar mil trescientos escudos. De esta forma se subvencionaba el consumo y se posibilitaba que los capitalistas pagaran salarios extraordinariamente bajos; mientras sus mujeres pudieran conseguir algunos artículos a precios oficiales, aunque eso les significara largas horas de cola, los obreros se conformaban con sus bajos salarios, especialmente cuando hacer huelgas era considerado “sedicioso”. Esta era una fuente de ganancias extraordinarias para los capitalistas que no respetaban los precios oficiales y derivaban la mayor parte de su producción al mercado negro. Pero la UP no tenía otra salida ya que sus posibilidades de “vía pacífica al socialismo” residían en la cantidad de votos que obtuviera en las elecciones. Además de esta forma los burócratas de la UP aumentaban sus posibilidades de

consumo suntuario: un automóvil Citroén o su similar, el Fiat 600, costaban, a precio oficial, alrededor de 500 dólares. Por eso la producción de automóviles estaba vendida íntegramente hasta 1975. Una de las primeras medidas de la Junta fue devaluar el escudo fijando dos tipos de cambio: uno para la importación de alimentos y maquinarias a 800 escudos el dólar y otro para el turismo a 1300. Esta devaluación incidió de inmediato en los precios internos ya que Chile importa la mayor parte de los alimentos que consume, ahora los obreros demócrata cristianos que tanto se quejaban de las colas y el desabastecimiento, sabrán, realmente lo que es el hambre y la miseria.

Una derrota histórica

El golpe de estado del 11 de setiembre es una derrota histórica para la clase obrera chilena que los propagandistas de la internacional de los imbéciles tratarán de ocultar en todo el mundo para disminuir su propia responsabilidad.

Derrota histórica en un doble sentido. En primer lugar porque la clase obrera chilena creyó alcanzar sus fines históricos: la construcción del socialismo, por medio electorales y pacíficos. Pasarán años antes de que los obreros chilenos que en todo este siglo no hicieron un solo intento insurreccional, puedan formarse una

nueva conciencia y comprendan que esos fines sólo los pueden alcanzar por medios insurreccionales; máxime cuando la internacional de los imbéciles y sus amigos socialdemócratas tipo Roger Garaudy usan sus medios de comunicación de masas para tratar de demostrar que lo ocurrido en Chile no significa la imposibilidad de llegar al socialismo por vía pacífica.

En segundo lugar porque los mejores combatientes del proletariado chileno han sido exterminados o están en la cárcel. Fue una “vanguardia” de características muy particulares ya que en defensa de una política ajena a los intereses del proletariado llegó a enfrentarse a las grandes masas menos politizadas.

Pero fue la vanguardia, real, existente, del proletariado más maduro de América Latina. Pasarán muchos años antes de que la clase obrera chilena destaque de su seno una nueva vanguardia despojada de las ilusiones reformistas que tuvo la que cayó bajo la represión militar. Las masas no tienen posibilidades de una respuesta efectiva inmediata. Los partidos tradicionales de la clase obrera están desorganizados y en estado de semi-disolución. La CUT ha sido disuelta y por mucho tiempo no habrá un organismo eficaz que centralice la lucha de las masas; los reformistas chilenos no habían sido capaces de sindicalizar más del 33% de los trabajadores teniendo el gobierno, no puede esperarse que lo hagan en las condiciones que ha establecido la dictadura militar. Las masas han sido traicionadas y lo comprenden así perfectamente pese a

la mitología que quieren elaborar para consumo de la izquierda sus traidores. El estado de ánimo prevaleciente entre los obreros detenidos en los campos de concentración es profundamente autocrítico, ellos comprenden que la política reformista de la UP fracasó y que muchos de sus dirigentes los traicionaron. Pese a la muerte heroica de Allende critican su determinación de resistir en La Moneda, símbolo secular del poder burgués, en lugar de hacerlo en los cordones industriales, junto a lo mejor de la clase obrera chilena. Es precisamente en este espíritu crítico del obrero chileno, en su capacidad de asimilar las experiencias históricas, en su desconfianza en los caudillos, mitos y dogmas, donde residen sus mejores posibilidades de recuperación. Recuperación que demandará mucho tiempo pero que vendrá inevitablemente.

El drama más grande de Chile es que una clase obrera socialista y combativa –aunque llena de ilusiones reformistas– no ha encontrado una dirección marxista revolucionaria capaz de proponerle una política proletaria. La intelectualidad de izquierda chilena vivió todo este siglo del puesto público del parlamentarismo. Hábil para la maniobra política, para la trama en los pasillos parlamentarios, para el discurso demagógico y la prebenda politiquera, fue incapaz de generar un movimiento teórico que pudiera confluir con las masas obreras en la formación de un partido revolucionario. Esta ausencia de teóricos marxistas era destacada con orgullo por los dirigentes del PC como un mérito. Se

sabe que los burócratas son grises y viven explotando la ignorancia que les permite utilizar el nombre del marxismo para su política oportunista. Pero la experiencia histórica demuestra –al menos hasta ahora– que sin la existencia de una intelectualidad revolucionaria la clase obrera no construye su partido.

El único fenómeno “nuevo” lo ha constituido el desarrollo del MIR. Este grupo surgió como una típica organización castrista y con un proyecto foquista. El triunfo electoral de Allende lo obligó a buscar una “política de masas” y a rever sus posiciones (se hizo más de una autocrítica innecesaria), pero hasta ahora no superó las limitaciones propias del castrismo. Su dirección joven, sin experiencia, sin intelectuales, de bajísimo nivel teórico y de origen pequeñoburgués (en su Comité Central no hay un sólo obrero), no acertó a proponer otro programa y otra táctica en los últimos tres años que la del reformismo teñida por una crítica de “izquierda”. Cada política de la UP fue seguida –incluso sus candidatos electorales en una situación en la que nada impedía que el MIR presentara los suyos– fielmente por su dirección, la que buscaba “diferenciarse” y justificar su existencia como organización independiente, haciendo algunas críticas verbales de “izquierda”. Su estructura vertical, típica del militarismo, no fue modificada y repele a los obreros revolucionarios que necesitan de la vida política, la democracia interna y la discusión para coordinar una acción eficaz. Meses antes del golpe algunos

de sus dirigentes obreros más importantes habían roto con su dirección porque la consideraban burocrática y oportunista. En realidad se trata de una dirección que quiere hacer la revolución “para” los obreros, pero que no ha comprendido en absoluto que “la liberación de la clase obrera sólo puede ser obra de ella misma”. Es casi inevitable que una organización con esas características, con muy poca influencia en la clase obrera, en la situación de opresión en que se vive ahora en Chile donde cualquier acto terrorista parece moralmente justificado, presionada por el castrismo caiga en la acción guerrillera de pequeños destacamentos aislados de las masas. Hasta ahora la dirección ha resistido esas presiones, pero es probable que no pueda hacerlo por mucho tiempo al menos sin fracturas importantes. Es necesaria la paciencia campesina combinada con el origen proletario que tuvo la dirección de Ho Chi Min y sus camaradas, para resistir una situación tan favorable al terrorismo pequeñoburgués y dedicar diez años –como lo hizo en la década del 30 el PC Vietnamita– a organizar a las masas. Si el MIR, siguiendo las indicaciones de los cubanos y despreciando la experiencia de doce años de inútiles sacrificios en América Latina, cae en el guerrillerismo, sólo contribuirá a desorganizar aún más a las masas, a apartar a valiosos cuadros de la tarea de organización del partido de la clase y a crear, introduciendo elementos ajenos a la lucha de clases del proletariado, condiciones para una más dura represión al movimiento de masas.

Se trata de la única organización que ha sido capaz de salvar sus cuadros y conservarlos en la clandestinidad; que juegue un papel positivo o negativo en el proceso de reorganización del movimiento obrero chileno que hoy se abre, depende del curso futuro que tome su política.

La consigna central con que la Junta Militar ha iniciado su mandato es la “Reconstrucción Nacional”. Evidentemente se trata de la reconstrucción del capitalismo chileno y de su desarrollo. Tres años de experimentos reformistas crearon una crisis monetaria y financiera, desataron una inflación galopante, hipertrofiaron aún más el ya monstruoso aparato burocrático y trabaron la reproducción capitalista; pero dejaron intacto el aparato productivo, salvo claro está, el retraso en la renovación de equipos y maquinarias que durante ese tiempo no se importaron por el cerco imperialista y porque se dilapidaron las divisas en importaciones suntuarias y de alimentos que el campesino chileno prefería contrabandear o vender en el mercado negro.

Pero todas estas distorsiones son relativamente fáciles de corregir aún cuando desaten luchas internas entre sectores de la burguesía y hagan necesario aplastar al proletariado bajo un talón de hierro. La UP —como lo demostraremos en un trabajo más extenso apoyándonos en todos sus documentos— se propuso solamente modernizar el capitalismo chileno. En 1970 Chile era uno de los pocos países semi-coloniales que quedaban en América Latina. El control de sus riquezas básicas estaban

en manos del imperialismo. La tarea de recuperarlas, que otras burguesías latinoamericanas encararon por sí mismas bajo la dirección de Perón, Vargas, Cárdenas, Estensoro, etc., la había encarado la burguesía industrial chilena durante el gobierno de Frei. Pero la democracia cristiana, atada por infinidad de hilos a la alta burguesía industrial asociada al imperialismo, no pudo llevar esa tarea hasta el fin; su astucia diabólica consistió en dejársela a los “partidos del proletariado” para después arrojarlos como un limón exprimido. La nacionalización del cobre y las riquezas básicas fue aprobada por unanimidad en el Congreso Pleno y hasta un reaccionario como el Contralor General de la República aprobó la deducción en concepto de “ganancias excesivas” de las indemnizaciones a las compañías norteamericanas del cobre. Después de Allende, Chile surge como un país capitalista relativamente independiente. El cobre, salitre, hierro, carbón, electricidad, petróleo, los bancos y algunas fábricas importantes que antes estaban en manos del capital extranjero, ahora son propiedad del Estado Burgués Chileno. Una enorme masa de plusvalía que antes de 1970 salía del país, ahora entrará en el ciclo de reproducción del capitalismo chileno. Claro que los obreros tendrán que pagar durante años las indemnizaciones que la UP pactó con las compañías extranjeras, pero eso afecta poco a los capitalistas.

En 1973, sin necesidad de pasar por una guerra civil como la mexicana de principios de siglo, el capitalismo

chileno puede agradecerle a la UP haberle librado del latifundio y haber transformado a los antiguos señores de la tierra en modernos capitalistas del agro o de la industria, según sea el lugar en que decidieran invertir las indemnizaciones que les pagó la UP. En el campo chileno están creadas ahora las condiciones “estructurales” para un acelerado desarrollo de la producción que elimine la sangría de divisas que significó tradicionalmente para Chile la importación de alimentos. Millones de campesinos que estaban marginados del mercado capitalista ahora constituyen un potencial mercado interno para el desarrollo de la industria.

En estos tres años incluso se pactaron algunos acuerdos con compañías internacionales, la industria automotriz en particular Peugeot, Fiat, Pegaso y Citroën, que permitirán ahora el desarrollo de ciertas ramas de la industria que no existían antes. La burguesía chilena, a través de la Junta Militar, está ahora en condiciones de pactar con el imperialismo nuevas condiciones de dependencia, mucho más ventajosas que las que tenía antes de 1970. Algunas fábricas podrán ser devueltas. Después de todo la potencia del proletariado chileno que creyó en el socialismo introdujo cierta irracionalidad en el plan de modernización de la UP y obligó a incorporar al área estatal industrias que no estaban previstas. Tanto mejor, esas fábricas podrán ser devueltas a cambio de nuevos créditos. Pero que nadie espere que la burguesía chilena devuelva las riquezas básicas, las industrias

fundamentales y los latifundios. Los esquemas teóricos de ciertos analistas de izquierda de moda se verán incompletos porque estos hechos no se producirán. No hay por qué reírse de la consigna de “Reconstrucción Nacional” de los militares chilenos, por más ridículas que sean algunas medidas como la campaña de aportes en joyas y dinero. La “revolución democrática, agraria y antiimperialista” de los “comunistas” ha sentado las bases para un renovado desarrollo del capitalismo en Chile. O para decirlo en las palabras de Rodrigo Ambrosio, fundador del MAPU y teórico de la UP: “Aquí puede seguir habiendo capitalismo en este país (el estilo es de Ambrosio, no nuestro) durante muchas decenas de años todavía, en el caso que la derecha chilena tuviera éxito en el cumplimiento de sus objetivos. Pero las formas de dominación del imperialismo norteamericano sobre ese capitalismo serían ya absolutamente diferentes a las que tuvo hasta el gobierno de Allende. La gran minería del cobre, en la hipótesis de un desarrollo capitalista en Chile en los años que vienen, queda definitivamente en manos del capitalismo de estado, con todas las implicancias políticas, ideológicas y teóricas” ...y económicas, agregamos nosotros. (Ver Rodrigo Ambrosio, Sobre el problema del poder, ediciones Lobo de Mar, páginas 78 y 79). Es lo que pasa cuando los “revolucionarios” olvidan que el problema del poder, es decir, la destrucción del estado burgués y todos sus órganos de dominación, es anterior al problema de una política de reformas económicas.

Una tragedia que termina en farsa

Marx dijo que las grandes tragedias históricas cuando se repiten, suelen adquirir características de farsa. La de Chile es la enésima tragedia que vive el proletariado conducido por direcciones burocráticas y pequeñoburguesas. No podía terminar en otra cosa que en una farsa. Este epílogo farsesco corre por cuenta de la internacional de los imbéciles. El órgano del Partido Comunista de Argentina, “Nuestra Palabra”, en su número del 24 de octubre de 1973 trae dos artículos dignos de Molière (salvando, claro está, las diferencias de estilo). Su editorial “Ultraísmo y contrarrevolución” y la declaración “Al pueblo de Chile” del PC chileno.

En su declaración el PC chileno elude cuidadosamente responder por la responsabilidad que le cabe en la derrota histórica del movimiento obrero chileno, adoptando un aire de humildad autocrítica que, como de costumbre, deja sin señalar ningún error concreto, tarea que promete para un nebuloso futuro. Este partido se ve obligado a un tono tan mesurado porque las masas chilenas ya le están exigiendo en todas partes rendición de cuentas. Ese tono se torna insolente en el PC argentino que por ser una gran secta aislada del movimiento obrero real no se siente obligado ante nadie y trata de aprovechar el desastre chileno para justificar su propia política, que si algún día llega a tener influencia en las

masas las llevará a derrotas tan graves como la chilena, o aún peores. El PC chileno dice: “El plan del golpe, su línea de ejecución y sus métodos bestiales son de origen extranjero. Nació en las oficinas de la CIA, en directa conexión con la Internacional Telegraph and Telephone y la Kennecott. Para llevar a cabo este plan se constituyó un grupo especial en el Pentágono y en la Casa Blanca”.

Esta interpretación mitológica del golpe chileno le cuadra muy bien a los burgueses de todo el mundo y sus lacayos. No hay dudas de que la CIA y el imperialismo tuvieron participación en el golpe, pero ese no es el problema fundamental. No hay en la declaración una sola palabra señalando que el golpe fue el desenlace (como dice Tomic, “inevitable”) de tres años de lucha de la burguesía chilena contra el proletariado y el gobierno, lucha en la que participaron con tácticas distintas todos los partidos y organizaciones de la burguesía, contando con el apoyo de la inmensa mayoría de la pequeñoburguesía y sus organizaciones gremiales y profesionales. El PC pretende transformar una lucha entre naciones lo que fue una lucha entre las clases. No dice en ninguna parte que las FFAA actuaron con una unidad monolítica y que ningún sector de la oficialidad y suboficialidad –salvo casos individuales aislados– se opuso al golpe: fue el ejército chileno, ese ejército “constitucionalista y democrático” de los comunistas, fueron los generales ministros de Allende los que dieron el golpe. No hubo necesidad de desembarcar marines

ni de poner oficiales extranjeros al mando de las tropas chilenas. Con este tipo de interpretaciones los “comunistas” chilenos se preparan para continuar lamiendo las botas de los militares burgueses, tarea que hicieron con entusiasmo durante tres años. Si algo demuestra la experiencia chilena es la impracticabilidad de la política de frente de liberación nacional que propugnaran los PC en Latinoamérica. Después del 4 de noviembre de 1970 los comunistas chilenos buscaron algún sector de la burguesía chilena para ganarlo en la lucha contra el imperialismo, todos sus llamamientos cayeron en el vacío y pese a que la UP sostenía que estaba haciendo una “revolución anti-imperialista” con el concurso de la “burguesía nacional”, todos los partidos burgueses la combatieron, unos para derrocarla, otros para limitar su programa. ¿Qué calificativo merece gente que dobla la cerviz de esta manera ante sus verdugos?

Más adelante dice: “En el mismo día del golpe se desarrolló frente a las costas de Chile la Operación Unitas, con la presencia de barcos y aviones norteamericanos”. Cierto, pero sólo una parte de la verdad. El diario “El Siglo”, órgano oficial del PC chileno salió legalmente hasta el día 11, la operación Unitas se venía desarrollando desde hacía varios días y los comunistas no hicieron ninguna campaña contra ella. Era la tercera vez que eso sucedía durante el gobierno de Allende y en todos esos años solamente grupúsculos insignificantes —el MIR se movilizó solamente el primer año— protestaron por

esa desvergonzada colusión de la marina chilena con la norteamericana bajo la aprobación de la UP. Es un poco tarde para denunciar hechos que se encubrieron, de parte de gente que mandó a reprimir por la policía a los pequeños grupos de manifestantes que protestaban contra ellos.

Ahora el PC chileno se lamenta: “¿Qué dice la Democracia Cristiana? ¿Dónde está su posición de otrora contra toda salida antidemocrática? ¿Qué ha sucedido con su concepción favorable al pluralismo ideológico y político? Otra vez los “comunistas” pretendiendo dictarle a la burguesía normas de conducta política, en lugar de cumplir con su deber leninista de explicar a las masas que no deben hacerse la menor ilusión sobre el democratismo de la burguesía. Los vemos aquí otra vez difundiendo la ponzoña liberal y alentando esperanzas en los partidos burgueses, justamente en momentos en que estos se hacen cómplices de la matanza de miles de sus militantes. Más adelante la declaración dice: “Fríamente y con tiempo se resolvió hacer lo que se hizo”, ¿Quién lo resolvió y quién le otorgó el tiempo necesario? ¿Lo resolvieron los comandantes Pinochet y Leigh designados por Allende? ¿el comandante Toribio Merino, designado intendente de Valparaíso por Allende? ¿el jefe de la zona de estado de sitio de Santiago, general Herman Brady, designado por Allende interventor en el conflicto del transporte? ¿el canciller Huerta, ministro de Allende? ¿el general Bravo quien masacra hoy a los obreros y campesinos

de Valdivia, que fuera jefe de la zona de emergencia en Santiago en octubre de 1972, designado por Allende? Sí, lo resolvieron todos estos generales a los cuales se incorporó al gobierno en medio de una desenfadada campaña del PC para convencer a las masas de que se los había ganado para el programa de la UP. Desde el gobierno al que habían llegado gracias a la política del PC, ellos gozaron del tiempo y las facilidades para planear la masacre y comenzaron a ponerla en ejecución antes del asalto a La Moneda con el silencio cómplice del PC.

Pese a todo esto veamos qué proponen los “comunistas” respecto a las FFAA: “Después de lo ocurrido el pueblo tiene derecho a plantearse también como objetivo la creación de fuerzas armadas y policiales de nuevo tipo o, al menos, eliminar de los institutos militares, carabineros e investigaciones, a los elementos fascistas, a fin de asegurarle a Chile que nunca más se repetirá lo que acaba de ocurrir.” ¿”Después de lo ocurrido”? ¿Un partido que alardea de ser integrante del movimiento comunista internacional, que se autoproclama hijo de la historia del movimiento obrero mundial, necesitó la aplastante derrota del proletariado chileno para plantearse la “creación de fuerzas armadas de nuevo tipo”? Hubiera bastado ser fieles a las centenarias caracterizaciones del movimiento obrero revolucionario de todo el mundo, las marxistas y las no marxistas, sobre el papel de las FFAA en el estado burgués para ahorrarle a los obreros chilenos tantos sufrimientos. Pero el PC chileno prefirió estigmatizar

como “ultra-izquierdistas” a las repetidas advertencias que hicieron voces aisladas sobre el papel que jugarían las FFAA en Chile; hasta hace pocos días era imposible convencer a los militantes de la UP influenciados por la prédica del PC de que el carácter de clase del ejército no había cambiado y los militares no eran “amigos del pueblo”. El día 11 a las 9 de la mañana Allende todavía aconsejó a las masas “esperar la reacción de los soldados de la patria”. Pero que nadie se llame a engaño, ni esta experiencia hará cambiar a los “comunistas” su política frente a los militares; en realidad ellos quieren –“al menos”– eliminar de las FFAA a los “elementos fascistas”. ¡Como si hoy pudieran nombrar a un solo oficial o suboficial que no tenga sus manos tintas de sangre obrera! Nuevas componendas y nuevas traiciones se preparan. En los párrafos finales la declaración afirma que “daño muy serio causaron las posiciones y las actividades de la ultraizquierda”, sin precisar en qué consistió el daño, veremos enseguida cómo sus camaradas argentinos con todo desparpajo pretenden presentar a la burguesía y a los militares como inocentes doncellas empujadas al campo de la contrarrevolución por los “ultraizquierdistas”. Para continuar “así como las tendencias reformistas que se expresaron en uno u otro momento en la propia acción del Gobierno Popular”. ¡Esto sí que es gritar “al ladrón”!

Luego los comunistas sin “desalojar debilidades ni errores” que, como de costumbre no señalan, pasan a defender la esencia de su política reformista: entendimiento con la

DC, lucha por el aumento de la producción y la disciplina en el trabajo, etc., política que apartó al proletariado de la lucha de clases y lo entregó inerme en manos de sus enemigos. Los comunistas chilenos estiman, una vez más, “que este no es el momento preciso para discutir los errores cometidos por el gobierno y la Unidad Popular en su conjunto o por cada sector político en particular”. ¿Cuándo entonces será el momento? ¿si después de una derrota de magnitud la clase obrera no discute sobre las causas que la provocaron para continuar la lucha sin repetir errores, cuándo debe hacerlo? La verdad es que a los “comunistas” no les interesa nunca la discusión ideológica porque su política sólo puede sostenerse en la mentira y en la deformación de la realidad histórica. Siempre hay pretextos para eludir la lucha teórica, en los momentos de lucha se recurre a las necesidades de la unidad, en los de triunfos episódicos al prestigio que dan los éxitos aunque sean efímeros, en los de derrota a la necesidad de la defensa común. Así se consigue arrastrar a gente sin firmeza teórica tras, una política oportunista, como le sucedió al MIR, que en julio de 1972 había iniciado la lucha ideológica contra la política del PC criticando especialmente la gestión de Millas en el Ministerio de Economía y que cuando se produjo la crisis de octubre decidió suspenderla para favorecer la unidad, sin advertir que de ese modo facilitaba las políticas oportunistas que favorecían la ofensiva burguesa. Dijimos que el PC argentino, que no se siente obligado

a responder ante las masas por el desastre chileno, lleva al paroxismo los errores de sus camaradas trasandinos. El editorialista de “Nuestra Palabra”, con un tono impropio de un partido que después de usufructuar durante más de 50 años el nombre del comunismo ha sido incapaz: de conquistar la menor influencia en la clase obrera., comienza advirtiendo que polemizará con “minúsculas tendencias”, como si los “comunistas” argentinos fueran otra cosa que una minúscula tendencia sin importancia política. Enseguida pasa a tomar el caso chileno como ejemplo de todos los errores que comete la “ultraizquierda” que favorecerían a la contrarrevolución. Veamos: “Los ultraístas elevan a la categoría de únicos, o fundamentales, los métodos de terrorismo individual o de grupo, en situaciones tan diferentes como la dictadura de Lanusse, el gobierno de Torres, el de la Unidad Popular o el de Perón, con lo que también se apartan del leninismo y alejan a los aliados reales y potenciales del proletariado, como ha ocurrido en Chile.”

“Apartarse del leninismo” es, sin duda, un cargo gravísimo; pero para ser leninistas es necesario comenzar por ser fieles a la verdad histórica. Según esta versión los “aliados reales y potenciales” del proletariado chileno se habrían “alejado” por obra de los terroristas. Sin embargo esos “aliados” opinaban otra cosa, basta leer los innumerables documentos de los gremios pequeñoburgueses durante sus huelgas contra Allende para ver que lo que ellos atacaban era la política de la UP –pese a que ésta

hacía todos los esfuerzos posibles para atraerlos— y no a un terrorismo de la ultraizquierda que sólo existe en la mente de la Junta Militar y de “Nuestra Palabra”. En lugar de señalar que durante tres años de gobierno de la UP, los únicos que hicieron terrorismo fueron los grupos fascistas de la burguesía, entrenados, armados y protegidos por las FFAA, mientras que todos los revolucionarios, sin excepción, desarrollaron la lucha de masas, estos agentes de la Junta Militar disfrazados de “comunistas” acusan a la “ultraizquierda” de un terrorismo que no realizó. En el lenguaje de esta gente, “ultraizquierdismo” en Chile es, fundamentalmente, el MIR. El PC argentino se atreve a hacer una afirmación que el chileno no puede hacer ya que no se puede señalar en los últimos tres años una sola acción de terrorismo individual o de grupo protagonizada por el MIR. Los únicos que se atreven a levantar esa calumnia son el PC argentino y la Junta Militar chilena.

“Nuestra Palabra” dice: “No comprenden que la actual etapa de la revolución en nuestro país no es socialista, sino que es democrática, agraria y antiimperialista, la cual abrirá el camino al socialismo”. Ahora agregamos nosotros: ¡sí, como en Chile! “Combaten como a enemigos principales a la burguesía nacional y a la pequeña burguesía, arrojándolas en manos del imperialismo yanqui, de los terratenientes y gorilas, como en Chile”. ¡Pobre burguesía latinoamericana, “arrojada” en manos del imperialismo por obra de los maléficos ultraizquierdistas!

Si algo demuestra la experiencia chilena es que todos los estratos de la burguesía, desde la grande a La pequeña, no vacilaron en aliarse con el imperialismo para combatir al gobierno de Allende, y mientras los comunistas repetían en todos sus escritos y discursos que la burguesía “nacional” era su aliada, ésta movilizaba las masas en la calle, especulaba en el mercado negro, armaba bandas terroristas, asesinaba militantes comunistas, saboteara la producción, paralizaba el país, golpeaba a las puertas de los cuarteles, bloqueaba en el parlamento las leyes del Ejecutivo y preparaba las condiciones políticas y sociales para el golpe. Para cualquier persona adulta bastaría constatar esta realidad para sacar conclusiones correctas, pero eso no pueden hacerlo quienes tienen su objetividad distorsionada por intereses de clase. La conducta de la burguesía chilena es una demostración entre tantas de que nuestros países están maduros para la revolución socialista, y que ésta es la única revolución posible; el otro camino, “el chileno”, todo el mundo puede ver adonde lleva. Sólo agentes de una de las dos potencias que se reparten el mundo irrespetan mutuamente sus zonas de influencia pueden combatir a la revolución socialista en nombre de una etapa previa irrealizable. Los “comunistas” hablan claro, sería muy bueno que los revolucionarios los entiendan de una vez por todas y dejen de creer ingenuamente que son “aliados” de la revolución socialista para tomarlos por lo que son: sus enemigos declarados que trabajan en todas partes

para que fracasos como el chileno se repitan. Nuestro articulista continúa: “La misma actitud perniciosa asumen frente a las Fuerzas Armadas y a la masa católica (...) contribuyendo de ese modo a emblocarlos con la derecha golpista y pro imperialista, exactamente como ha ocurrido en Chile”. Nuevamente se reemplaza el análisis de clase por la psicología vulgar: los militares se “emblocan” con el imperialismo porque son atacados por la ultraizquierda. No se puede prestar un servicio mayor que éste a los gorilas militares y eclesiásticos.

En la parte final de su artículo, “Nuestra Palabra” incursiona en la sociología: “La exacerbación de la ultraizquierda en los últimos tiempos se debe a dos razones fundamentales: en primer lugar, a la incorporación masiva de las capas medias a la lucha antiimperialista”. Y esto lo dice el editorialista de un partidito que no dirige ningún sindicato importante, que no influencia ninguna concentración obrera de magnitud, cuya base de apoyo fundamental son las cooperativas de crédito pequeñoburguesas y en el que el 80 % de sus militantes provienen de ese sector social. Es cierto que algunos sectores de la pequeñoburguesía se han incorporado a la “lucha antiimperialista” a través del guerrillerismo, pero cuantitativamente son muchos más los que lo han hecho a través del PC donde encuentran un programa reformista y nacionalista y una modalidad de actividad política que se adapta muy bien a sus aspiraciones de clase. La segunda razón de la “exacerbación de la ultraiz-

quiera” sería el “impulso que le imprime el imperialismo, considerándola, a pesar de su verborragia incendiaria, un aliado objetivo en su tarea de combatir la revolución”.

Con esta calumnia nuestro comediante termina su profundo análisis y queda tranquilo con su irreprochable conciencia “proletaria y revolucionaria”. Nosotros terminamos formulándole una pregunta: ¿no son los más eficientes contrarrevolucionarios aquellos que en una sociedad madura hasta la putrefacción para el socialismo, prefirieron aliarse a Pinochet & Cía., contra la revolución socialista en nombre de una inexistente “revolución democrática, agraria y antiimperialista”?

Octubre 1973

Significado de las siglas usadas en este libro

CUT	Central Única de Trabajadores
FACH	Fuerza Aérea de Chile
GAP	Grupo Amigos del Presidente
JAP	Junta de Abastecimientos y Precios
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
PC	Partido Comunista.
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PNI	Partido Nacional
PR	Partido Radical
PS	Partido Socialista
UP	Unidad Popular

